

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-55)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 56-106)

MARINA RODRÍGUEZ BEAS

Profesora de Derecho Administrativo / Professora de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. El nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 1.2. Novedades en ámbitos sectoriales diversos. A. Aguas. B. Protección de la atmósfera. C. Instalaciones nucleares. D. Comercio de madera. E. Biocarburantes. F. Sustancias peligrosas. G. Energía eléctrica. H. Eficiencia energética. I. Movilidad y transporte. 1.3. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. El nuevo régimen de comunicación previa y registros generales de productores y gestores de residuos. 2.2. La regulación del desarraigo de árboles y de arbustos. 2.3. Otras normas de interés. 2.4. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. A. La Mesa de Calidad del Aire en El Camp de Tarragona. B. El establecimiento de una prórroga a la moratoria para determinadas infraestructuras de gestión de residuos. C. El Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el año 2016. D. Subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones. E. El Catálogo del Paisaje de las Comarcas Centrales

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

Durante el período objeto de análisis (del 1 de octubre de 2015 al 20 de abril de 2016), a nivel estatal son pocas las novedades normativas en materia ambiental que se han producido. Desde las pasadas elecciones generales, celebradas el 20 de diciembre, donde ninguna fuerza política obtuvo un resultado que le permitiese gobernar sin apoyos, continúa en funciones el último Gabinete de la X Legislatura. Como consecuencia de esta situación política, la actividad legislativa se ha visto gravemente afectada. De hecho, únicamente se ha aprobado una norma con rango de ley, el Real Decreto-Ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo¹, la cual no tiene una incidencia ambiental.

No obstante, como viene siendo habitual, se han aprobado en estos meses varias normas reglamentarias en ámbitos sectoriales diversos (aguas, eficiencia energética, protección de la atmósfera...), aunque quizá lo más destacable sea la aprobación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que introduce una concepción nueva respecto a la ordenación del territorio y la ordenación urbanística, al disponer que estas son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general y con el principio de desarrollo sostenible.

En el plano internacional, merece especial mención la autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la firma del Acuerdo de París, un hito en la lucha contra el cambio climático. El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

¹ BOE, núm. 92, de 16 de abril de 2016.

Cambio Climático alcanzó el Acuerdo de París. Este acuerdo tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura global del planeta supere los 2 °C respecto a los niveles preindustriales e intentar lograr, además, esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C. También cabe destacar el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de noviembre de 2015, que reconoce el compromiso de España con el Fondo Verde para el Clima, el principal instrumento financiero de lucha contra el cambio climático de la ONU, que promueve el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En materia de energía renovable, también debe destacarse que se ha resuelto a favor del Reino de España el primer laudo arbitral internacional sobre las reformas en el sector de la energía fotovoltaica. El Tribunal Arbitral del asunto Charanne B.V. y Construction Investments S.A.R.L. contra el Reino de España² ha desestimado la demanda presentada por ambos inversores, sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía, contra las reformas llevadas a cabo en el año 2010 en el sector de la energía fotovoltaica.

También se ha puesto de manifiesto en este período la conflictividad competencial entre Estado y comunidades autónomas. Prueba de ello es el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo³. Asimismo, el Gobierno ha aprobado interponer un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional en relación con la adquisición de créditos de carbono a cargo del Fondo de Carbono, dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector de la Empresa (PIMA Empresa), para la reducción de gases de efecto invernadero⁴. Además, en este período el Tribunal Constitucional ya ha resuelto dos recursos de inconstitucionalidad comentados en crónicas anteriores. Por una parte, recientemente el Tribunal Constitucional, en la

² Arbitraje núm. 062/2012.

³ Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional por providencia de 15 de marzo de 2016. Vid. Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 26/2015, de 29 diciembre, sobre el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

⁴ Vid. Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 1/2016, de 25 de febrero, sobre el Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector de la Empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

Sentencia de 14 de abril de 2016, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña. Se declara nulo el artículo 167.1 al entender que invade competencias del Estado por cuanto prohíbe el uso de la fractura hidráulica o *fracking* en la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, siendo la autorización para el empleo de esta técnica una competencia estatal, tal y como el Tribunal ha declarado en sentencias anteriores (SSTC 106/2014, 134/2014 y 208/2014). En el mismo sentido que en los pronunciamientos anteriores, el Tribunal Constitucional señala que las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medio ambiente no justifican la prohibición del *fracking* al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero y energético y de ordenación general de la economía. Así, la Sentencia afirma que la ley catalana impugnada no desarrolla ni complementa la legislación estatal, sino que la “reformula bajo una perspectiva radicalmente distinta”, ya que dicha norma “la contempla en sentido inverso como tecnología que debe prohibirse por sus posibles efectos perjudiciales ante cualquiera de las múltiples circunstancias enunciadas”. Por otra, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Murcia contra varias disposiciones del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El Tribunal Constitucional valida, por lo tanto, los principios del nuevo marco retributivo para las energías renovables, que han sido desarrollados por el Gobierno como parte de su reforma eléctrica⁵.

En cuanto a las proposiciones de ley de grupos parlamentarios del Congreso, ha iniciado su tramitación parlamentaria la Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la exención de las instalaciones que operen en régimen de autoconsumo vinculadas al ciclo del agua hasta el 31 de diciembre de 2019.

En relación con las normas reglamentarias en trámite, se encuentra en tramitación la Propuesta de Programas de Medidas de las Estrategias Marinas, que fue presentada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sometida a consulta pública el pasado mes de diciembre. Posteriormente, una vez que se hayan concluido los

⁵ STC 270/2015, de 17 de diciembre de 2015 (BOE, núm. 19, de 22 de enero de 2016).

trámites de consulta pública y de evaluación ambiental, las Estrategias Marinas se aprobarán mediante un real decreto, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. En el ámbito de la protección de la fauna, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sometido a participación pública en enero de 2016 la propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueba el Plan de Conservación de las Orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la legislación estatal respecto a la inclusión de un taxón o población en la categoría de “vulnerable” del Catálogo de Especies Amenazadas. En materia de residuos, este mismo ministerio ha sometido al mecanismo de participación pública el proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que transpone los cambios que incluía la modificación de la Directiva 2015/1127 de la Comisión en su anexo II. El cambio más significativo de esta modificación es el que se realiza en la fórmula del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la cual contempla la eficacia de la instalación para recuperar el poder energético de los residuos y para darle un uso a dicha energía bajo forma de electricidad, calor, refrigeración o vapor. En el ámbito de las sustancias peligrosas, se ha sometido a información pública el proyecto de Orden Ministerial que modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, con motivo de la transposición de dos directivas delegadas de la Unión Europea —la Directiva 2015/573 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en sensores de cloruro de polivinilo utilizados en productos sanitarios de diagnóstico *in vitro*; y la Directiva 2015/574 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el mercurio en los sistemas de obtención de imágenes de ultrasonido intravascular—, para adaptar el sector al progreso técnico.

En el ámbito de la planificación, también debe destacar que el Gobierno ha culminado el segundo ciclo de planificación hidrológica en todas las cuencas competencia del Estado con la aprobación, mediante Real Decreto, de los 12 planes hidrológicos de

competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla; y de los planes de competencia autonómica de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.

Por último, destacamos también que en el período objeto de examen ha finalizado el plazo de transposición de las tres nuevas directivas en materia de contratación del sector público que aprobó la Unión Europea en 2014⁶. Ante la falta de normativa de transposición en España, tanto los tribunales administrativos encargados de la resolución del recurso especial⁷ como algunas juntas consultivas de contratación se han pronunciado sobre el efecto directo de estas directivas⁸.

1.1. El nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

El pasado 31 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Se trata de una norma que pretende, por una parte, aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como de la Ley 8/2013, de 26 de

⁶ Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; y Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

⁷ Han elaborado un estudio aprobado en reunión del 1 de marzo de 2016. Publicado en la sede del Observatorio de Contratación Pública. <http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Documento_final_ESTUDIO_aplicacion_directa_de_las_Directivas_b43ec509%232E%23pdf/chk.a1819767e7f5371f26dd16ff0f1edcf3> (Fecha última consulta: 25/04/2016).

⁸ Vid. Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública (BOE, núm. 66, de 17 de marzo de 2016); Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (BOE, núm. 85, de 8 de abril de 2016); Informe 17/2015, de 3 de diciembre, sobre los efectos de las Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, tras la conclusión del plazo de transposición. Posibilidades de desarrollo; e Informe 1/2016, de 6 de abril, sobre contenidos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública, que deben ser de aplicación directa a partir del día 18 de abril, fecha en que finaliza su plazo de transposición. Breve referencia a la aplicación directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y, por otra, estructurar y ordenar en una única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance que contienen aquellos. Esto con la finalidad de evitar la dispersión de las citadas normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, excepción hecha de la parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que tiene una aplicación supletoria salvo en los territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación legislativa por cuya virtud se dicta este real decreto legislativo. Todo ello basándose en la delegación recogida en el artículo 1 h) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española.

Este texto refundido tiene por objeto regular, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan “la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo; un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (art. 1). Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en la materia. Se trata de una norma dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1^a, 13^a, 23^a y 25^a de la Constitución española, que atribuye al Estado las competencias para regular las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del régimen de las administraciones públicas, de la planificación general de la actividad económica, de protección del medio ambiente y del régimen energético. También se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8^a y 18^a de la Constitución española, que reserva al legislador estatal la competencia para dictar las disposiciones sobre legislación civil, procedimiento administrativo común y expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las administraciones públicas.

El nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se estructura en un título preliminar y ocho títulos, integrados por 68 artículos, y contiene, además, trece disposiciones adicionales, cuatro transitorias y tres disposiciones finales. El título preliminar (arts. 1 a 4) establece el objeto de esta Ley, las definiciones, el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y el concepto de la ordenación del territorio y ordenación urbanística. El título I (arts. 5 a 19) se destina a la regulación de las condiciones básicas de la igualdad en materia de derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos. El título II (arts. 20 a 28) se centra en las bases del régimen del suelo, las reglas procedimentales comunes y las normas civiles. En cuanto a las bases del régimen del suelo, determina los criterios básicos de utilización del suelo, las situaciones básicas del suelo, la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y la garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. El título III (arts. 29 a 30) regula el informe de evaluación de los edificios. El título IV (arts. 31 a 33) contempla el régimen jurídico de la cooperación y colaboración interadministrativa. El título V (arts. 34 a 41) se centra en las valoraciones, su régimen, los criterios generales para la valoración de inmuebles y la valoración del suelo rural y urbanizado. El título VI (arts. 42 a 48) regula la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial (el régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística; el justiprecio, la ocupación e inscripciones en el Registro de la Propiedad, la adquisición libre de cargas, las modalidades de gestión de la expropiación, los supuestos de reversión y de retasación y los supuestos indemnizatorios). El título VII (arts. 49 a 54) establece la función social de la propiedad y gestión del suelo, regulando la sobre la venta y sustitución forzosa, los patrimonios públicos de suelo y el derecho de superficie. Y, finalmente, el título VIII (arts. 55 a 68) regula el régimen jurídico de las actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal, las peticiones, actos y acuerdos, las acciones y recursos, y el Registro de la Propiedad.

Entre los cambios más destacables, aunque no introduce nuevos conceptos, cabe mencionar su nueva concepción respecto a la ordenación del territorio y ordenación urbanística, al disponer que estas son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general (art. 4.1)⁹. Asimismo, establece —artículo 3— que las políticas públicas

⁹ En este sentido, SORIANO-MONTAGUT JENÉ, L., “Publicado el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”, en un Blog de Terraqui, noviembre 2015 (disponible en el siguiente

relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. De este modo, estas políticas públicas “deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente” (art. 3.2). Con esta finalidad, se determina que los poderes públicos formulen y desarrollen, “en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional”. Además, sobre estas políticas señala específicamente que: a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más eficientes económica y ambientalmente. d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente. e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios. f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los

enlace: <<http://www.terraqui.com/blog/actualidad/publicado-el-nuevo-texto-refundido-de-la-ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/>>, último acceso, 30 de junio de 2016).

desplazamientos peatonales y en bicicleta. g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social. h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica. i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico responsable. k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural. l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización”¹⁰.

En cuanto a la rehabilitación urbana, el texto refundido establece que serán prioritarias las medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía (art. 4.4).

Por lo tanto, el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana sistematiza el marco jurídico estatal relativo al suelo, la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, dirigiendo sus políticas públicas hacia el “uso racional de los recursos naturales y armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidad, la salud y seguridad de las personas y la protección del medio ambiente” (art. 3.2)¹¹.

¹⁰ Art. 3.3.

¹¹ *Vid.* SORIANO-MONTAGUT JENÉ, L., “Publicado el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”, en Blog de Terraqui, noviembre 2015 (disponible en el siguiente enlace: <<http://www.terraqui.com/blog/actualidad/publicado-el-nuevo-texto-refundido-de-la-ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/>>, último acceso, 30 de junio de 2016).

1.2. Novedades en ámbitos sectoriales diversos

A. Aguas

En materia de aguas, deben mencionarse cuatro normas reglamentarias. En primer lugar, el Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, que tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23^a de la Constitución española. Mediante este real decreto se transpone al derecho español la Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, que, a su vez, fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

A estos efectos, este real decreto modifica el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, añadiendo una nueva disposición final para habilitar al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para modificar, previa consulta a las comunidades autónomas, los anexos a fin de adaptarse a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y al conocimiento científico y técnico, así como para dictar las normas de desarrollo que resulten necesarias para la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el Real Decreto; en el anexo II, parte A, al determinar los niveles de referencia se fijan unos principios que deberán tenerse en cuenta; a la lista de sustancias contenidas en el anexo II, parte B, se añaden los nitritos y los fosfatos; y en el anexo II, parte C, se determina la información que deberán incluir los planes hidrológicos relativa a los contaminantes y sus indicadores para los que se hayan establecido valores umbral. También realiza un cambio puntual tanto en el Reglamento de la Planificación Hidrológica como en la Instrucción de la Planificación Hidrológica.

En segundo lugar, destacamos el Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, con el

contenido incluido en los anexos I y II del Decreto 171/2014, de 23 de diciembre, de la Generalitat de Catalunya.

El Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña —título con el que la Generalitat de Catalunya denomina al Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de sus cuencas internas— incluye cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma y, como tal, ha sido elaborado por la Administración autonómica competente e informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua en su reunión del 27 de mayo de 2015.

El Plan que aprueba este real decreto corresponde al primer ciclo de planificación, ya que el Plan aprobado por el Decreto 188/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat de Catalunya, a su vez aprobado por el Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, en los términos exigidos por el artículo 41.1 y 40.6 del texto refundido de la Ley de Aguas, ha quedado sin efecto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2014.

En tercer lugar, destacamos el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. El Real Decreto se enmarca en el segundo ciclo de revisión y actualizaciones de los planes hidrológicos para el período 2015-2021.

Y, por último, el Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, tal como fue aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en su reunión del 19 de febrero de 2016.

B. Protección de la atmósfera

En materia de protección de la atmósfera, deben mencionarse especialmente tres normas reglamentarias, todas ellas dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 23ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre la legislación básica en materia de protección del medio ambiente.

En primer lugar, en el ámbito de los compromisos del Protocolo de Kioto, se ha

aprobado el Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de unidades del primer al segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de España.

El Protocolo de Kioto y las decisiones que lo desarrollan adoptadas por la Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto establecen una serie de procedimientos que deben iniciarse al final del primer período de compromiso con objeto de proceder a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cada parte para ese período, así como el tratamiento específico que ha de darse a las unidades de emisión definidas en el marco del Protocolo. Estos procedimientos incluyen, entre otras cosas, la presentación de un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero que recoja la serie histórica desde el año 1990 hasta el año 2012 y su revisión por parte de equipos de expertos independientes, a fin de realizar la determinación definitiva de las emisiones y absorciones de cada país parte durante el período 2008-2012. También deberá realizarse un proceso de retirada de las unidades de emisión necesarias para cubrir las emisiones producidas; podrá llevarse a cabo un proceso de arrastre del primer al segundo período de compromiso de las unidades sobrantes y un proceso final de cancelación de las unidades que no hubieran sido arrastradas ni canceladas en fases previas. Estos procedimientos deben realizarse a partir del año 2015, de conformidad con los plazos marcados por las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto.

El Gobierno, mediante este real decreto, regula el arrastre de unidades de titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el Registro Nacional de España, dentro de los límites marcados, concretando determinados extremos sobre el alcance que este arrastre tiene para los participantes en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y en el Registro Nacional Kioto de España. Asimismo, a través de este real decreto se atribuye la ejecución del arrastre de las unidades de titularidad pública a la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.

Para dar cumplimiento a estos fines, el artículo 1 del Real Decreto establece que podrán ser objeto de arrastre al segundo período de compromiso (2013-2020) las reducciones certificadas de emisiones (RCE) y las unidades de reducción de emisiones (URE) originadas en el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto (2008-2012) que

se encontraran, a fecha 1 de abril de 2015, en cuentas de haberes de titular de instalación, cuentas de haberes de operador de aeronaves, cuentas de haberes de persona y cuentas de comercio abiertas en el área española del Registro de la Unión, así como en cuentas de haberes de persona (cuentas cuya numeración comienza por ES-121) y cuentas de haberes de titular de instalación (cuentas cuya numeración comienza por ES-120) abiertas en el Registro Nacional Kioto. Asimismo, también podrán ser objeto de arrastre las reducciones certificadas de emisiones (RCE) originadas en el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto (2008-2012) que sean transferidas directamente desde el registro del Mecanismo de Desarrollo Limpio a cualquiera de las cuentas identificadas en el párrafo anterior con posterioridad al 1 de abril de 2015 y hasta el 18 de noviembre de 2015 inclusive. Pero, una vez que se haya realizado la operación de arrastre, el remanente de reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones originadas en el primer período de compromiso que se encuentre en cuentas de haberes del Registro Nacional Kioto y no hubiera sido arrastrado al segundo período de compromiso será cancelado de conformidad con lo que a este respecto se acuerde a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En segundo lugar, se ha aprobado el Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

El objeto del Real Decreto es la regulación, en el marco del Plan PIMA Empresa, del procedimiento específico de adquisición, por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO₂), de créditos de carbono a empresas que ejecuten actuaciones que reúnan los requisitos que se establecen en la norma, según lo previsto en el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. El Fondo tiene entre sus objetivos la generación de actividad económica baja en carbono y la contribución al cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España. Mediante el Real Decreto se contempla el procedimiento específico para que el referido Fondo adquiera, como créditos de carbono, reducciones reconocidas de emisiones de efecto invernadero que se logren como consecuencia de la reducción de la huella de carbono de alcance 1 enmarcadas en

el Plan PIMA Empresa. De este modo, el Real Decreto “tiene por finalidad impulsar actividades e inversiones, con una orientación hacia la eficiencia en el uso de la energía, las energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de proceso y la sustitución de gases fluorados por otros de menor potencial de calentamiento global”.

El Real Decreto prevé, en el artículo 3, que el Fondo “podrá adquirir créditos de carbono que se generen por la reducción de emisiones directas de gases de efecto invernadero de las empresas”. A este respecto, el Real Decreto establece lo siguiente:

Para ser objeto de adquisición, los créditos de carbono deberán provenir de reducciones de emisiones directas de gases de efecto invernadero que cumplan con las condiciones siguientes:

- a) No deberán venir exigidas por la normativa sectorial que les resulte de aplicación y contarán con todas las autorizaciones administrativas necesarias.
- b) Deberán contribuir al cumplimiento de los compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España, mediante el logro de reducciones que tengan reflejo en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero.
- c) Las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero no procederán de instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, con el objeto de evitar supuestos de doble contabilidad.
- d) Deberán proceder de una o varias de las actuaciones incluidas en el anexo I.
- e) Procederán de actuaciones puestas en marcha posteriormente a la publicación de este real decreto.

Asimismo, para “determinar los proyectos susceptibles de producir una reducción de emisiones que generen créditos de carbono adquiribles por el Fondo, se define un catálogo de actuaciones elegibles en el anexo I del presente real decreto”.

También se establece que el precio “de adquisición de los créditos de carbono será de 9,7 euros por unidad, constituyendo cada unidad la reducción de una tonelada de CO₂ equivalente”. El Real Decreto también regula el procedimiento de evaluación y reconocimiento de créditos de carbono, determinando los órganos competentes para instruir y resolver; las obligaciones de los titulares de los créditos de carbono, los cuales se comprometen a “mantener las actuaciones por un tiempo igual o superior al de los

años de reducción (B_i) incluidos en la fórmula del anexo I, cuyo efecto podrá ser informado a través del registro de su huella de carbono en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, y, en caso de transmisión de la titularidad de instalaciones, “el nuevo titular se subrogará en dichas obligaciones”; las medidas de incumplimiento de las obligaciones de los titulares de créditos de carbono; la publicidad; las ayudas de minimis y límites por solicitantes; y las incompatibilidades de este plan.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. El Real Decreto tiene por objeto la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Por su incidencia ambiental destacamos la disposición final primera del Real Decreto, por la que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio, en relación con los equipos de recuperación de vapores de gasolina.

C. Instalaciones nucleares

En materia nuclear, se ha aprobado el Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

El Gobierno ha considerado necesario proceder a la revisión del Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, para incorporar la legislación aprobada tras su entrada en vigor, como la Ley 29/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la experiencia adquirida en cuanto a la tramitación del documento Plan de Protección Física de las instalaciones nucleares, así como la exigencia de coordinar su aprobación con el Plan de Protección Específico en el

Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, y establecer el procedimiento para ello.

Mediante el Real Decreto se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, en los siguientes aspectos: en el artículo 2 se añaden dos nuevas definiciones (Unidad de Respuesta y Respuesta de Entidad Adecuada); en el artículo 5 se determina que “[l]as actuaciones, comunicaciones, archivos, registros y documentos relativos al diseño, establecimiento y aplicación de las medidas de protección física de materiales e instalaciones nucleares [...] tendrán la consideración de información que afecta a la seguridad nacional a los efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 29/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”; el párrafo b) del apartado 3 del artículo 6, sobre la elaboración, puesta en práctica y mantenimiento de los planes de actuación exterior y respuesta y los planes de información preventiva; el apartado 1 del artículo 8, relativo a la amenaza que deberá tomarse como base para el diseño de los sistemas de protección física de las centrales nucleares y de aquellas instalaciones nucleares y fuentes radiactivas que se considere necesario; el artículo 14 e) determina la descripción mínima que deberá contener el Plan de Protección Física de la instalación; el artículo 30, en relación con las medidas generales de protección física de las centrales nucleares y en las instalaciones nucleares que se determine por ley; y se introduce un nuevo párrafo d) en el artículo 31, relativo a las medidas generales de protección física en las instalaciones nucleares no incluidas en el artículo 30. Finalmente, se introduce una disposición adicional única sobre la integración de planes de protección física y planes de protección específicos.

D. Comercio de madera

En el ámbito de la comercialización de la madera, cabe mencionar el Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de madera. Su objeto es establecer la regulación necesaria en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera a la Comunidad Europea, y el Reglamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, por el que se establecen las

obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, así como en su normativa de desarrollo.

En cuanto a su contenido, el Real Decreto determina la autoridad competente FLEGT en España. El Real Decreto también identifica las autoridades competentes en España para la aplicación del Reglamento (UE) 995/2010 y desarrolla las atribuciones que cada una de ellas tiene encomendadas, de acuerdo con el régimen constitucional de competencias. En este sentido, establece que “el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, será responsable de la comunicación e interlocución con la Comisión Europea y el resto de autoridades competentes de otros Estados de la Unión Europea, de la elaboración de los informes nacionales a los que hace referencia el citado Reglamento y su normativa de desarrollo”, mientras que las comunidades autónomas “son las autoridades competentes a las que corresponde el desarrollo normativo así como las funciones ejecutivas inherentes a su carácter de autoridades competentes, en la realización de controles sobre los agentes y comerciantes que comercializan con madera y productos de la madera y la recepción y tramitación de la declaración responsable que incluye este real decreto, así como el control de las entidades de supervisión con sede social en la comunidad autónoma” (art. 3). Asimismo, para facilitar la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas competentes, prevé crear un grupo de trabajo específico en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente a nivel nacional, en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (art. 4).

Se establece el procedimiento para la validación de la licencia FLEGT que deberán presentar los importadores de productos de madera y derivados procedentes de un país con acuerdo voluntario de asociación en vigor, cuya validez se verificará por la autoridad competente FLEGT. Además, el Real Decreto determina también un régimen de declaración responsable —art. 7— para aquellos agentes que comercialicen productos de madera en el mercado nacional, independientemente de su origen¹². A través de la declaración responsable se pretende conocer las características y la naturaleza de los agentes que comercializan productos de madera en España y, en

¹² Este es un requisito adicional al establecido en la normativa europea, pero se contempla en la normativa española a través de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

segundo lugar, facilitar a estos agentes el cumplimiento del contenido del Reglamento FLEGT.

Por último, el Real Decreto crea “el Sistema estatal de información del comercio de madera en España con el objetivo de coordinar la información sobre la naturaleza de los agentes y comerciantes que comercializan madera y productos de la madera en España y su actividad en este ámbito” (art. 10). Y en el artículo 11 se fija el compromiso de elaborar “el Plan nacional de control de la legalidad de la madera comercializada, con el fin de reducir el riesgo de comercializar madera y productos de la madera de origen ilegal en todo el territorio nacional, y de establecer el procedimiento interno de aplicación de lo dispuesto en este real decreto”.

E. Biocarburantes

En el ámbito de los biocarburantes y otros combustibles renovables, se ha aprobado el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes. El Real Decreto se enmarca en el cambio sustancial de la coyuntura, que dio lugar a la aprobación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, y en el actual escenario de precios de los carburantes, con lo cual el Gobierno “considera conveniente revisar los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para el período 2016-2020, estableciendo únicamente un objetivo global de consumos mínimos obligatorios de biocarburantes, de manera que los sujetos obligados tengan flexibilidad para alcanzarlo, a través de certificados de biocarburantes en diésel o en gasolina, indistintamente”.

Su objeto es introducir “medidas relacionadas con el fomento de la utilización de los biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, así como la incorporación parcial al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía renovable procedente de fuentes renovables”.

A estos efectos, el Real Decreto establece para el año 2016 un objetivo global anual mínimo obligatorio de venta o consumo de biocarburantes del 4,3%. Asimismo, para los años correspondientes al período 2017-2020 los objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes en cómputo anual serán del 5%, 6%, 7% y 8,5%, respectivamente, todos

ellos en contenido energético. También dispone que para el año 2020 el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el porcentaje de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcar, de oleaginosas y de otros cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7%. Pero, además, se habilita al Gobierno a modificar los objetivos fijados, “así como a establecer objetivos adicionales, en función de la evolución del sector de los carburantes y de los distintos tipos de carburantes, los progresos alcanzados en el consumo de electricidad procedente de fuentes renovables en el transporte y de la normativa comunitaria que se establezca en materia de objetivos de energía renovable en el transporte y en el consumo final bruto de energía”.

El Real Decreto también prevé que “se establecerá, antes del 6 de abril de 2017, un objetivo de venta o consumo de biocarburantes avanzados, el listado de los biocarburantes que tendrán la consideración de avanzados, así como el factor multiplicador del contenido energético de cada uno de ellos, para el cumplimiento, en su caso, de cada uno de los objetivos regulados. Este desarrollo se realizará en los términos exigidos por el Derecho de la Unión Europea”.

Pero en el caso de los biocarburantes producidos a partir de residuos, se establece que estos no deben implicar “una demanda adicional de suelo, aportando reducciones considerables de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Para cumplir los objetivos previstos, se dispone que “debería fomentarse la utilización de los biocarburantes procedentes de materias primas residuales, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en particular, el principio de jerarquía de residuos”.

También regula los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte, estableciendo en su artículo 3 los siguientes:

- a) Los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por sus ventas anuales en el mercado nacional, excluidas las ventas a otros operadores al por mayor.
- b) Las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, en la parte de sus ventas anuales en el mercado nacional no suministrado por los operadores al por mayor o por otros distribuidores al por menor.

c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no suministrado por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos.

Asimismo, también cabe destacar lo que prevé la disposición adicional tercera sobre la información relativa al origen del combustible en instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes. En este sentido, se establece lo siguiente:

[...] los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, que no pertenezcan a la red de distribución de un operador al por mayor, podrán informar del origen del combustible que comercializan publicitando el operador mayorista o distribuidor del que adquieren el combustible. En este caso, deberán indicar obligatoriamente la fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social de todos los operadores al por mayor y distribuidores a los que se haya adquirido combustible, como mínimo, en los últimos sesenta días. Asimismo, podrán incorporar las marcas, logotipos u otros signos distintivos de dichos operadores y distribuidores, únicamente en aquellos casos en lo que cuenten con la autorización previa y por escrito del titular de tales marcas, logotipos o signos distintivos.

Con esta regulación, según la exposición de motivos, “se pretende que la información que se presente a los consumidores sobre el origen del combustible suministrado por las instalaciones de suministro al por menor sea veraz y fiel, así como proteger los derechos de marca de los operadores al por mayor y distribuidores al por menor que suministran a estaciones independientes”.

También se prevé la obligación de información de las comunidades autónomas y entidades locales sobre sus programas de ahorro y eficiencia energética. Con esta finalidad, se establece que, “desde la entrada en vigor de este real decreto, las entidades locales así como el órgano competente de cada comunidad autónoma en materia de eficiencia energética, informarán anualmente, antes del 31 de diciembre de cada año, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de los ahorros energéticos y de las emisiones de dióxido de carbono evitadas, derivados de las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética promovidas por la entidad local o comunidad autónoma y

llevadas a cabo en el ámbito de su municipio y de su territorio respectivamente, y de forma agregada desde el 1 de enero de 2014”.

Finalmente, “en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, se establece la obligación de realizar una evaluación del potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad, con el fin de poder determinar las medidas e inversiones concretas en las redes que supongan mejoras de eficiencia energética, se recogen algunos aspectos en relación a la facturación y al acceso a los datos de los consumidores de gas y electricidad y se regula la obligación de aportar información a los consumidores de energía eléctrica sobre el potencial de los contadores de telegestión”.

F. Sustancias peligrosas

Mediante el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta norma tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública. A través del Real Decreto se transponen a nuestro ordenamiento interno las restantes previsiones de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.

El Real Decreto “tiene por objeto la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente” (art. 1). Para dar cumplimiento al objetivo señalado, el Real Decreto presenta cambios importantes como “la alineación de las categorías de sustancias de su anexo I con las correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificación de sustancias y mezclas”. Asimismo, “se incluye un mecanismo de corrección de este anexo para prever las posteriores adaptaciones al sistema de clasificación que pudieran repercutir sobre sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de accidente grave”.

Además, el Real Decreto refuerza las disposiciones relacionadas con el acceso del público a la información, “con la participación efectiva del público interesado en la toma de decisiones y con los derechos del público a interponer recurso ante la justicia”. Todo ello con la finalidad de potenciar los mecanismos para la recopilación de

información, su intercambio entre las autoridades competentes y la Comisión Europea y su difusión y puesta a disposición del público.

En cuanto a los procedimientos de consulta a los industriales y de participación pública en el marco de las políticas de ordenación territorial y otras pertinentes, este real decreto “prevé la coordinación de dichos procedimientos con los existentes en otras normativas”.

En relación con las inspecciones de los establecimientos afectados por el Real Decreto, “se introducen criterios más estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, así como una implantación efectiva de las medidas de control consideradas”.

Por último, el Real Decreto “contempla la estructura general de la Planificación de protección civil ante riesgos especiales, integrada por el Plan estatal, los planes de comunidades autónomas y, dentro de estos últimos, los Planes de actuación municipal, que constituyen el modelo nacional integrado para hacer posible una coordinación y actuación conjuntas de los diferentes servicios de las administraciones ante los accidentes graves con sustancias peligrosas”.

G. Energía eléctrica

La actividad normativa en el sector eléctrico en el período objeto de análisis ha sido intensa. Destacamos, en primer lugar, el Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector eléctrico. Mediante este real decreto se procede a la modificación de determinados aspectos de la regulación vigente que, por tratarse de cuestiones puntuales o por requerir una aprobación urgente para su aplicación en el menor plazo, se aglutinan en esta normativa.

Este real decreto procede “a una modificación del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión”, para introducir las novedades del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, “en relación con la facturación a partir de datos de medida horaria para los suministros de pequeños consumidores que dispongan de equipos de telemedida y telegestión efectivamente integrados en el sistema”. Asimismo,

también modifica el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, “con la finalidad de precisar cuándo un equipo de medida se encuentra efectivamente integrado en el sistema de telegestión”. También modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, a las instalaciones eólicas marinas hasta 50 MW para suprimir la limitación de los 10 MW ligada al carácter experimental y ampliar el procedimiento general simplificado. En ese mismo ámbito, se procede a modificar el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para determinar que las “instalaciones de potencia superior a 50 MW tendrán que someterse al procedimiento previsto en el título II”. Además, el Real Decreto incorpora una modificación puntual de algunos aspectos del Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, “con la finalidad de simplificar determinados requisitos de carácter técnico, en particular para puntos de recarga de pequeña potencia asociados a actividades distintas de la recarga energética. Se facilitará así la implantación de puntos de recarga en instalaciones de consumo en el sector terciario, lo que podría suponer un impulso adicional para el despliegue de los puntos de recarga, dada la atomización en el territorio de estos consumidores”. En cuanto al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se modifican determinados aspectos de carácter operativo como la definición del término de estimación de ingresos de explotación futuros. Por último, “se procede a incluir la obligación, a las empresas titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilicen carbón autóctono como combustible, de enviar mensualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Operador del Sistema la información relativa a la utilización de ese combustible, con el fin de permitir el seguimiento del límite previsto en el artículo 25.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, relativo a la utilización de fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en aplicación de la Directiva 2009/72/CE, sobre mercado interior de electricidad”.

En segundo lugar, cabe mencionar la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, previsto en el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Cabe señalar, en tercer lugar, el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, autoriza a que el Gobierno, excepcionalmente, pueda “establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras normas de Derecho de la Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia energética exterior”, fijando los términos en los que ha de realizarse.

A estos efectos y con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, el Real Decreto “establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica”.

El objeto de esta norma es “el establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de las condiciones, tecnología o colectivo de instalaciones concretas que podrán participar en una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. Asimismo, se aprueba la convocatoria para la asignación del régimen retributivo específico” (art. 1), por lo que se aplica “a las siguientes instalaciones de producción de energía eléctrica, de acuerdo con las clasificaciones establecidas en los artículos 2 y 4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos: a) nuevas instalaciones de biomásas de los grupos b.6, b.8 o híbridas tipo 1, siempre que en este último caso no utilicen como combustible licores negros del grupo c.1, situadas en el sistema eléctrico peninsular; b) instalaciones del subgrupo b.2.1 nuevas o modificaciones de instalaciones existentes” (art. 2.1).

En cuanto a la asignación del régimen retributivo específico, el Real Decreto establece que su asignación se determinará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Y, por último, mediante el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, se procede a la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas para la conexión a la red de las instalaciones que se acojan a cualquier modalidad de autoconsumo de energía eléctrica. No obstante, “las instalaciones de cogeneración y su consumidor asociado, aunque compartan infraestructura de conexión a la red, seguirán pudiendo elegir entre la venta de toda la energía neta generada o el acogimiento a la modalidad de producción con autoconsumo, cuando cumplan los requisitos establecidos en el citado real decreto”. El autoconsumo se define en la Ley 24/2014, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, “como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociada a un consumidor y distingue varias modalidades de autoconsumo” de energía, bien con consumo total de dicha energía, bien con existencia de excedentes de la instalación de producción que pudieran verterse a las redes. Esta ley, en relación con el autoconsumo, tiene por finalidad garantizar un desarrollo ordenado de la actividad compatible “con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto” y remite a un desarrollo reglamentario.

El Real Decreto “resulta de aplicación a las instalaciones conectadas en el interior de una red, aun cuando no viertan energía a las redes de transporte y distribución en ningún instante”, acogidas a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica. Todo ello sin perjuicio de las exenciones previstas para las instalaciones aisladas y los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que

se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En cuanto a su contenido, se estructura en seis títulos diferentes, integrados por 25 artículos, y contiene, además, diez disposiciones adicionales y diez disposiciones transitorias. En el título I (arts. 1 a 3), incluye una serie de disposiciones generales destinadas a delimitar su objeto y ámbito de aplicación y a fijar la definición de conceptos relevantes. El título II (arts. 4 a 6) se centra en determinar la clasificación de las modalidades de autoconsumo, los requisitos generales de las instalaciones para acogerse a una modalidad de autoconsumo y la calidad del servicio. El título III (arts. 7 a 10) regula el régimen jurídico de las modalidades de autoconsumo, estableciéndose el procedimiento de conexión y acceso en las modalidades; la formalización de contratos de acceso en las modalidades de autoconsumo; los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica; y los contratos de suministro de energía en las modalidades de autoconsumo. En el título IV (arts. 11 a 15) se regulan los requisitos generales de medida en la modalidad de autoconsumo y la gestión de la energía eléctrica producida y consumida. El título V (arts. 16 a 18) incluye las condiciones de contratación del acceso a las redes y las condiciones de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Finalmente, el título VI (arts. 19 a 25) regula la organización y el funcionamiento del Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica previsto en el artículo 9.4 de la Ley 24/2013, de 26 de septiembre, del Sector Eléctrico, y el régimen de inspección y sancionador. De las diez disposiciones transitorias, resulta relevante el contenido de la primera, sobre el régimen económico transitorio de aplicación al consumo; la segunda se refiere al régimen de las instalaciones de cogeneración que cuenten con autorización de explotación; y la tercera prevé la adecuación de las instalaciones que realicen autoconsumo de energía a la entrada en vigor del Real Decreto.

H. Eficiencia energética

En el ámbito de la eficiencia energética, se ha aprobado el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

La Unión Europea actualizó el marco legal con la aprobación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, para alcanzar “el objetivo general consistente en lograr en 2020 un ahorro del 20% en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020”.

El Real Decreto tiene como finalidad “el impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE”.

A estos efectos, el Real Decreto “transpone parcialmente la citada directiva, principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío”.

El Real Decreto, cuyo objeto es “el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética”, se estructura en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y unos anexos. El capítulo I (art. 1) determina su objeto y finalidades, así como las definiciones necesarias para la interpretación correcta del texto. El capítulo II (arts. 2 a 6) se destina a la regulación de las auditorías energéticas y en él se prevé su ámbito de aplicación; el alcance de la exigencia y los criterios mínimos que deben cumplir las auditorías energéticas; los requisitos que deben cumplir para alcanzar la cualificación de auditor energético; el sistema de inspección de la realización de las auditorías energéticas; y la creación del Registro Administrativo de Auditorías Energéticas. Conforme a esta regulación, las auditorías energéticas se aplicarán “a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que

ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio”. Quedan excluidas del ámbito de aplicación las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas empresas deben someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. El capítulo siguiente, el III (arts. 7 a 12), regula las condiciones y los requisitos que deben observarse para la acreditación de estos proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos. El capítulo IV (art. 13) regula “la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, con objeto de facilitar información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un entorno estable y propicio para las inversiones”. Y, finalmente, el capítulo V (art. 14) prevé el régimen sancionador por los incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto.

También cabe destacar las cuatro disposiciones adicionales que incluye el Real Decreto. La primera establece el plazo de que disponen “las grandes empresas para cumplir la obligación de realizar una auditoría energética y la posibilidad de que las auditorías realizadas a partir de diciembre de 2012 puedan servir para cumplir la obligación con ciertas condiciones”. La disposición adicional segunda determina la obligación recogida en la Directiva 2012/27/UE “de que se deberá realizar una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes”. En la disposición adicional tercera “se establece que las medidas incluidas en este real decreto no supondrán un incremento de gasto”. Y en la cuarta se fija “la definición de edificio de consumo de energía casi nulo”.

I. Movilidad y transporte

En materia de movilidad y transporte, destaca, por una parte, el Real Decreto 1071/2015, de 27 de noviembre, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución española, que confiere al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que modifica el Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente,

PIVE-8”. Esta modificación se realiza “con la finalidad de mantener la continuidad del programa, a efectos de admisión de reservas, hasta el 31 de julio de 2016 o hasta el agotamiento de los fondos”.

Por otra, el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. El Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA) “es una medida que forma parte de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, diseñada y puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en colaboración con otras entidades y Ministerios, con el objeto de unificar los distintos programas y planes dirigidos a apoyar la adquisición de los vehículos más eficientes que se han desarrollado hasta el momento. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que toma conocimiento de la misma el 26 de junio de 2015”. El Gobierno ha considerado conveniente y necesario dar continuidad a este tipo de programas de incentivos, encaminados a promover la adquisición de vehículos de energías alternativas.

Este real decreto “tiene por objeto regular las bases para la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), motos eléctricas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico, fomentando con ello la sostenibilidad en el sector del transporte, la disminución de las emisiones de contaminantes y la mejora de calidad del aire, así como la diversificación de las fuentes energéticas en el transporte y la consiguiente reducción de la dependencia energética del petróleo. Asimismo, también se contempla en este real decreto la concesión de ayudas para la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público” (art. 1).

Estas subvenciones se concederán para la adquisición en España de vehículos de las categorías detalladas en el artículo 4 y para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas de acceso público. Asimismo, las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por *leasing* financiero o arrendamiento por *renting* de un vehículo nuevo o para la adquisición de vehículos eléctricos de hasta seis meses de antigüedad, exceptuando las bicicletas de pedaleo asistidas por motor eléctrico.

Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto 15/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. La finalidad de esta modificación es clarificar la aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que respecta a la posibilidad que brinda la ley para que la gestión la realice una entidad colaboradora.

1.3. Otras normas de interés

Además de las normas reseñadas, en el período objeto de análisis pueden mencionarse otras normas de interés. Destacamos, entre ellas, en materia de gestión de residuos, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, publicado mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

Este plan se enmarca en la Política de Cohesión para el Período 2014-2020, que “incluye como nueva condición para la financiación de inversiones, el cumplimiento de determinados requisitos previos”, y entre estas condiciones para el sector de los residuos “se incluyen la existencia de planes de gestión de residuos de conformidad con lo establecido en el artículo 28” de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.

A estos efectos, el Plan “pretende ser el instrumento para orientar la política de residuos en España, impulsando las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promoviendo las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren la consecución de los objetivos legales”.

Para dar cumplimiento a estas finalidades, en el Plan se prevé la aplicación del principio de jerarquía establecido en la normativa de la Unión Europea. Este principio “establece que la prevención debe ser la prioridad principal en relación con la política de residuos”, seguida “por la preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de valorización, incluida la valorización energética, siendo el depósito en vertedero la última opción de la jerarquía para gestionar los residuos”. El Plan se estructura en 25 capítulos, dedicados gran parte de ellos “a los flujos de residuos con normativa

específica: residuos domésticos y comerciales, residuos de envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, neumáticos al final de su vida útil, aceites usados, pilas y baterías, residuos de construcción y demolición, lodos de depuración de aguas residuales, PCB's y PCT's, residuos agrarios, residuos de industrias extractivas, residuos industriales, buques y embarcaciones al final de su vida útil y residuos sanitarios". Para todos estos flujos de residuos "se describe la normativa y objetivos aplicables, la evolución y la situación actual de la gestión de residuos y se establecen objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para conseguirlos". También se incluye un capítulo dedicado a los suelos contaminados.

Y, en materia de energía eléctrica, además de las ya citadas en esta crónica, cabe mencionar la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre —dictada al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1.13ª de la Constitución española, que confiere al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y por el artículo 149.1.25ª, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético—, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2010.

El documento de Planificación Energética "incluye previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda, los recursos necesarios para satisfacerla, la evaluación de las condiciones del mercado para garantizar el suministro y los criterios de protección ambiental". En cuanto a la estructura de abastecimiento, "las previsiones del documento son que en los próximos años se mantendrá la tendencia observada en la planificación 2008-2016, que supone un aumento importante del peso de las energías renovables y del gas natural, fundamentalmente, en detrimento del petróleo". En este sentido, "se prevé un aumento de la participación de las energías renovables del 20 por ciento sobre la energía final bruta y del 10 por ciento sobre el consumo energético del sector transporte".

En relación con la demanda eléctrica final en consumo, el Plan "prevé un crecimiento medio anual del 2 por ciento para el período 2014-2020, superior al crecimiento de la demanda final y de la demanda primaria", lo que se debe a que gran parte "de las medidas de eficiencia energética se corresponden con medidas de electrificación". Asimismo, el Plan también "prevé un cambio en la estructura del parque generador, con

una caída del peso del carbón, de los productos petrolíferos y del gas natural y un aumento del peso de las energías renovables, de acuerdo con los objetivos en materia de renovables para 2020”. Finalmente, el Plan incluye un anexo II “con actuaciones cuya necesidad se prevé para después de 2020, al objeto de que puedan avanzar en su tramitación administrativa sin que en ningún caso se puedan considerar como infraestructuras planificadas”.

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

A diferencia de lo que había venido sucediendo en crónicas anteriores, en las que advertíamos de la elevada actividad normativa de Cataluña en materia de protección del medio ambiente, en el período examinado son pocas las novedades normativas. En este sentido, no se ha aprobado ninguna norma específicamente ambiental con rango de ley.

En el ámbito reglamentario, las normas más destacables son el Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de Cataluña, y el Decreto 242/2015, de 10 de noviembre, por el que se regula el desarraigo de árboles y de arbustos.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período continúa su curso la tramitación del Proyecto de Ley del Cambio Climático. El 26 de enero de 2016, el Gobierno catalán aprobó el Proyecto de Ley del Cambio Climático de Cataluña¹³, siguiendo el camino ya recorrido en el campo de la acción climática, todo ello con el fin de afrontar el calentamiento global mediante una norma con rango de ley. Con esta norma se persiguen, básicamente, cinco finalidades. En primer lugar, conseguir que Cataluña reduzca tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, favoreciendo la transición hacia un modelo bajo de emisiones en gases de efecto invernadero y, a la vez, estimulando el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos (energía, agua, suelo, materiales, residuos). En segundo lugar, reforzar las diversas estrategias y planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climático. En tercer lugar, promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas las

¹³ Publicado en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya* el 25 de mayo de 2015.

administraciones públicas catalanas, así como fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos. En cuarto lugar, convertirse en un país avanzado en la investigación e implementación de nuevas tecnologías. Finalmente, visualizar el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático. Así, su objetivo general es “contribuir al logro de una sociedad innovadora, sostenible y económicamente competitiva con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y mejor adaptada a los impactos del cambio climático” (art. 1). No obstante, el propio texto articulado especifica una serie de objetivos: la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña para contribuir a la transición hacia una sociedad con una baja intensidad de consumo de combustibles fósiles; la reducción de la vulnerabilidad de la población, los sectores socioeconómicos y los ecosistemas ante los impactos adversos del cambio climático, así como la creación y el refuerzo de las capacidades nacionales de respuesta a estos impactos; la adaptación de los sectores económicos y la incorporación del análisis de la resiliencia al cambio climático en la planificación de las infraestructuras y de las edificaciones; el fomento de la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología y la difusión del conocimiento en materia de adaptación y mitigación del cambio climático; el establecimiento de mecanismos que proporcionen información objetiva y evaluable sobre todos los aspectos relacionados con el cambio climático, su evolución temporal y sus impactos; y el impulso de la participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales en la elaboración y evaluación de las políticas climáticas.

En cuanto a la estructura, el Proyecto de Ley consta de cincuenta artículos, agrupados en un capítulo preliminar, seis capítulos, ocho disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y once disposiciones finales. El capítulo preliminar determina el objeto de la Ley, detalla las responsabilidades, concreta el ámbito de aplicación y establece las definiciones a las que se refieren las disposiciones de esta norma. El capítulo primero contiene la regulación de los objetivos relativos a las políticas de mitigación. El capítulo segundo prevé los objetivos de adaptación; recoge los requisitos que deben contener los instrumentos de planificación y programación sectoriales con el fin de lograr una coordinación intersectorial para que la legislación sectorial catalana se adapte al nuevo marco regulador. El capítulo tercero regula la integración de los objetivos y el establecimiento de medidas para conseguirlos mediante la introducción de

la perspectiva del cambio climático en todas las políticas sectoriales de las administraciones públicas. En el capítulo cuarto se delimita el nuevo modelo organizativo; se refuerza el papel de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático; se articula el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de toma de decisiones que se adopten en materia de cambio climático; y se regulan la naturaleza, los fines, la composición y las funciones del Consejo Catalán del Clima como órgano de participación de organizaciones e instituciones representativas de intereses diversos. El capítulo quinto regula nuevos instrumentos de fiscalidad ambiental y ecológica para fomentar maneras de producir y consumir más limpias, con menos impactos ambientales. Y el capítulo sexto incluye una serie de instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de la norma.

Con este texto normativo Cataluña será pionera en España y en los países del sur de Europea por la introducción, en una norma con rango de ley, del control del cambio climático en todas las políticas sectoriales de las administraciones públicas para favorecer medidas que permitan su mitigación o adaptación, entre otras: el uso de energías renovables, la mejora en la gestión de los residuos, el desarrollo del autoconsumo y la eficiencia energética; la creación de nuevas figuras impositivas para fomentar maneras de producir y consumir energía más limpia y con menos impactos ambientales; y la creación del Fondo Climático para el cumplimiento de los objetivos de la norma.

El Gobierno también ha aprobado, el pasado mes de marzo, el Proyecto de Ley de Ordenación de las Actividades de Espectáculos Públicos y Recreativos, con lo que retoma su tramitación, que había decaído al finalizar la legislatura anterior.

Paralelamente, se están gestando varias iniciativas normativas de gran interés en material ambiental. En primer lugar, se ha sometido a información pública el Proyecto de Decreto sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña. En segundo lugar, también se ha sometido a información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20). Por último, el Proyecto de Decreto por el que se prevé aprobar el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020 (PINFRECAT20) también se ha sometido a información pública.

En el ámbito de la planificación, y más concretamente en relación con la elaboración del Plan Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo más destacable es el impulso que el Gobierno le ha dado mediante la constitución del Grupo de Trabajo Interdepartamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Plan debe orientar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cataluña y es un reflejo del compromiso con la Agenda 2030 de la ONU.

Por último, desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político, cabe destacar el nuevo Plan de Gobierno de Cataluña, que se ha presentado el pasado día 19 de abril de 2016, relativo a la XI legislatura. Los objetivos ambientales que persigue este plan giran alrededor de cuatro grandes ámbitos de actuación: proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos, y promover el uso sostenible del patrimonio natural para que este se convierta en fuente de riqueza para el territorio; combatir el cambio climático, mitigar sus efectos y reducir el impacto de las actividades sobre el entorno para mejorar la calidad ambiental del territorio; gestionar el agua de manera sostenible para garantizar la disponibilidad con criterios sociales, económicos y ambientales; y apostar por una economía verde y circular que ahorre recursos mediante la valorización de los residuos y que impulse la innovación en la sociedad. Estos objetivos se enmarcan en la concepción de la sostenibilidad de manera global y transversal en las distintas acciones del Gobierno, planteando un ambicioso conjunto de múltiples leyes y medidas para alcanzarlos. Para conseguir el primer objetivo, relativo a la protección y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos y la promoción del uso sostenible del patrimonio natural, se proponen una serie de normas y medidas: la creación de la Agencia del Patrimonio Natural de Cataluña; la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley de Restauración de Actividades Extractivas; modificación de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas; la Estrategia Catalana de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; el reglamento de la Ley de Protección de los Animales; la estrategia de financiación de la política de patrimonio natural, e incremento del 30% de los recursos y la capacidad de los parques naturales y los consorcios de gestión de los espacios naturales protegidos; la elaboración de un sistema integrado de hitos e indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015) en materia de sostenibilidad, aplicados en Cataluña; la creación de una fundación que atraiga capital público y privado para

proyectos ambientales; un programa de actuaciones de infraestructura verde en Cataluña; un protocolo y un sistema de información para el seguimiento ambiental de planes y programas; un catálogo de protección de la fauna y la estrategia de la flora de Cataluña la elaboración del informe cuatrienal del estado del medio ambiente en Cataluña 2011-2014; creación de un registro de contratos para el fomento de la custodia del territorio; el reglamento del Banco de Conservación de la Naturaleza como mecanismo de compensación de impactos ambientales; un plan cuatrienal de inspección de actividades extractivas 2016-2019 (con programas anuales); y el desarrollo del Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental.

En cuanto al segundo objetivo, se proponen, entre otras, las siguientes normas y medidas: la Ley de Cambio Climático; la Ley de Calidad Ambiental; el desarrollo de los programas voluntarios de compensación y de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); la hoja de ruta gubernamental de mitigación de la emisión de GEI horizonte 2020 y revisión de los objetivos de mitigación horizonte 2030; la revisión de la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático (ESCACC); el despliegue operativo del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, institución dedicada a recopilar información en materia de seguimiento del cambio climático; la modificación y mejora del sistema de vigilancia de la calidad del aire y mejora de los canales de intercambio de información; la implantación del Plan para la Mejora de la Calidad del Aire, en la conurbación de Barcelona; la implantación de un sistema específico para la vigilancia de la calidad del aire con especial incidencia en los compuestos orgánicos, en el marco de la Mesa de Calidad del Aire del Camp de Tarragona; la declaración de los parques naturales del Montsant y del Cap de Creus y del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio como zonas de especial protección y puntos de referencia en materia de contaminación acústica y lumínica; la elaboración y aprobación de los planes de acción de reducción de la contaminación acústica para las grandes aglomeraciones y las grandes infraestructuras, en colaboración con los entes locales y los titulares; la aplicación de medidas de movilidad sostenible a partir de vehículos de bajas emisiones y del sistema de certificación ambiental de flotas; la coordinación interdepartamental para la aplicación del Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) y restante normativa europea en materia de sustancias químicas; y la definición del programa de proyectos domésticos de compensación de CO₂.

En cuanto al tercer objetivo, relativo a la gestión sostenible del agua, se incluyen, entre otras, las siguientes normas y medidas: el Pacto Nacional del Agua para definir la planificación y la gestión hídrica a largo plazo y los objetivos para la redistribución del esfuerzo; el apoyo a municipios con problemas financieros para conectarse a redes de abastecimiento en alta o para crear nuevas captaciones; el nuevo colector de salmueras de la cuenca del Llobregat; el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (PGDCFC); el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI); el Programa de Medidas del Ámbito Hidrológico (PMH); el Plan Especial de Sequías (PES); la evaluación de alternativas para solucionar el déficit hídrico de las cuencas internas de Cataluña; el impulso de la construcción del abastecimiento supramunicipal para cuatro comarcas (la Segarra, la Conca de Barberà, l’Anoia y l’Urgell); la redacción del Plan Especial de Usos de los embalses de la Baells y Darnius-Boadella; y el Plan de Acompañamiento para la Municipalización del Agua (PAMA), que incluya la creación de un equipo de asesoramiento jurídico a disposición de los municipios que quieran iniciar la remunicipalización de los servicios de agua para garantizar la corrección, la fiabilidad y el buen desarrollo normativo.

Por lo que se refiere al cuarto objetivo, que apuesta por una economía verde y circular, el Plan de Acción propone, entre otras, las siguientes normas y medidas: la aprobación y desarrollo del Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20); la aprobación y desarrollo del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020 (PRINFRECAT20); una ley de residuos que establezca la consideración de los residuos como recursos, en línea con el objetivo europeo de una economía circular y el uso eficiente de los recursos; la aplicación del acuerdo con el mundo local para la consolidación de la evolución del canon de residuos municipal, con horizonte 2020; la revisión del canon de residuos industriales; la prohibición de la distribución gratuita de bolsas de plástico; el diseño de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para determinadas categorías de envases de bebidas; el apoyo a los entes locales para el desarrollo de sistemas eficientes de recogida selectiva, como el puerta a puerta, así como de sistemas de pago más justos, como el pago por generación; la puesta en servicio de siete nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos municipales, dos mejoras de plantas y la optimización de la capacidad de las instalaciones existentes; la prueba piloto de aplicación del canon de residuos industriales en la recuperación de

suelos afectados por antiguas actividades industriales en Sant Llorenç d'Hortons; la aplicación de la Estrategia Catalana de Ecodiseño, para una economía circular y ecoinnovadora; el establecimiento de criterios ambientales de referencia adecuados a las diferentes tipologías y objetos de contrato, en el marco de la compra pública verde; la promoción de la adscripción a los sistemas voluntarios de gestión ambiental (EMAS, Etiqueta Ecológica de la UE y Distintivo europeo) para potenciar el compromiso ambiental de las empresas; el programa de asesoramiento a las pymes en economía verde y circular; y los cupones de ecoinnovación para pymes, para mejorar su competitividad y la transición hacia una economía verde y circular.

Asimismo, recientemente el Gobierno de la Generalitat ha ratificado el Acuerdo que 195 países aprobaron por unanimidad durante la XXI Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. El objetivo del Gobierno catalán es reforzar el papel de Cataluña como territorio activo en las políticas de lucha contra el cambio climático y consolidar su posición de liderazgo a nivel internacional.

2.1. El nuevo régimen de comunicación previa y registros generales de productores y gestores de residuos

En el ámbito de los residuos, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto que regula los requisitos que deben cumplir en Cataluña los productores y los gestores de residuos obligados a comunicar el inicio de sus actividades y los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos en Cataluña. Se trata del Decreto 197/2016, de 23 de febrero, que tiene por objeto regular la comunicación previa al inicio de la actividad de producción, transporte y de agente o negociante de residuos, prevista en el artículo 24.1 a) del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, y la prevista en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados. También tiene por objeto regular el Registro General de Personas Productoras de Residuos de Cataluña y el Registro General de Personas Gestoras de Residuos de Cataluña, adscritos a la Agencia de Residuos de Cataluña. Este decreto, en el marco de la armonización de la normativa catalana con la legislación básica estatal, desarrolla “las previsiones legales sobre las comunicaciones previas previstas en el art. 24 del Texto refundido de la Ley de residuos” y actualiza “la regulación de los registros existentes para adecuarlos al marco

legal vigente”. Se configura como una manifestación de los criterios de simplificación y racionalización que actualmente rigen la actividad administrativa.

En cuanto a su contenido, el Decreto se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos, “Disposiciones generales”, regula el objeto del Decreto de conformidad con lo señalado anteriormente, así como la naturaleza pública de los registros y los efectos de la inscripción y su comunicación al registro estatal.

El capítulo II, por su parte, regula el régimen de las comunicaciones previas. Se establece para las personas físicas o jurídicas la obligación de presentar una comunicación previa al inicio de la actividad de producción, de transporte y de agente o negociante de residuos ante la Agencia de Residuos de Cataluña:

- a) Las actividades que produzcan residuos peligrosos.
- b) Las actividades que produzcan más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos.
- c) Las actividades de transporte de residuos de manera profesional con métodos profesionales.
- d) Las actividades de recogida de residuos sin una instalación asociada.
- e) Las actividades de agente o negociante de residuos, de acuerdo con la definición de los artículos 3.k) y 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- f) Las actividades de eliminación de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción y de valorización de residuos no peligrosos, cuando estén exentas de autorización, de acuerdo con los criterios que se determinen para cada tipo de actividad.

Asimismo, se exime de la obligación de comunicación previa a las empresas que hayan obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que, como consecuencia de su actividad, produzcan residuos. Pero también se exime a las actividades de producción de residuos sometidas a la intervención administrativa ambiental de acuerdo con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades.

En el capítulo III se regula el Registro General de Personas Productoras de Residuos en Cataluña, recogiendo los datos que deben constar, la modificación de datos y la baja en el Registro. Son objeto de inscripción en este registro “las personas productoras de residuos peligrosos y las personas productoras de residuos no peligrosos que superen las 1.000 t/año”. Finalmente, en el capítulo IV se regula el Registro General de Personas

Gestoras de Residuos de Cataluña, que se divide a su vez en tres secciones —gestores de residuos, transportistas de residuos y agentes o negociantes de residuos—, y se establecen prescripciones concernientes al procedimiento de inscripción, al contenido de la inscripción, a la modificación de datos y a la baja en el Registro.

El Decreto contiene también una disposición transitoria en la que se prevé que la información obrante en los registros de la Agencia de Residuos que desaparecen en virtud de la disposición derogatoria¹⁴ —Registro de Productores; Registro General de Gestores; Registro de Transportistas de Residuos Industriales; Registro de Transportistas de Residuos Inertes de Construcción y Demolición— será incorporada a los nuevos registros.

2.2. La regulación del desarraigo de árboles y de arbustos

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto que regula el desarraigo de árboles y de arbustos. Se trata del Decreto 242/2015, de 10 de noviembre, que tiene por objeto establecer la regulación de los aprovechamientos forestales consistentes en la extracción de árboles y de arbustos realizada en terrenos forestales.

El Decreto responde a la necesidad de incorporar los requerimientos de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y a las previsiones del Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica, que prevé la necesidad de revisar los procedimientos administrativos para adecuar la gestión administrativa a los requerimientos de eficacia y eficiencia que tienen que presidir la actividad de la Administración pública. Además, incorpora las obligaciones establecidas en el Decreto 131/2012, de 23 de octubre, por el que se regula el Registro Oficial de Empresas Proveedoras de Materia Vegetal y se establecen las normas de autorización, inscripción y funcionamiento, se regulan actividades de producción y comercialización de material vegetal y se crea el Catálogo de Variedades Locales de Interés Agrario de Cataluña.

¹⁴ Quedan derogadas las disposiciones siguientes: los artículos 4, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos; el Decreto 115/1994, de 6 de abril, regulador del Registro General de Gestores de Residuos de Cataluña; los artículos 17 y 18 y el anexo del Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de Gestión de Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

En el decreto comentado, se distinguen dos regímenes de intervención administrativa para realizar la actividad de desarraigo. Por una parte, se regula el régimen de comunicación previa, al que se podrán acoger las fincas forestales que cuenten con un instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente que incluya el desarraigo de árboles y arbustos. En este caso, las personas titulares de las fincas forestales deberán presentar, con una antelación mínima de 10 días, una comunicación previa al departamento competente en materia de bosques. Y, por otra, se regula el régimen de autorización previa, previsto para las fincas forestales que no disponen de instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente. Pero se establece, como requisito común a las solicitudes de autorización y las comunicaciones previas, la obligatoriedad de “hacer constar al responsable de la realización de los trabajos, que debe estar inscrito en el Registro oficial de empresas proveedoras de material vegetal, de acuerdo con el Decreto 131/2012, de 23 de octubre, por el que se regula el Registro oficial de empresas proveedoras de material vegetal y se establecen las normas de autorización, inscripción y funcionamiento, se regulan actividades de producción y comercialización de material vegetal y se crea el Catálogo de variedades locales de interés agrario de Cataluña”.

Por otro lado, el Decreto recoge las condiciones técnicas mínimas aplicables a los desarraigos, y, en lo que concierne al régimen de infracciones y sanciones —artículo 7—, se remite al título VI de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña, y a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

2.3. Otras normas de interés

Además de las reseñadas, en el período objeto de análisis pueden mencionarse otras normas, una aprobada y las otras en trámite, de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, en primer lugar, la aprobación del Decreto 226/2016, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 342/2011, de 17 de mayo, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. La elaboración de este decreto responde, por una parte, a la necesidad de adecuar la estructura del Departamento a la nueva distribución de competencias establecida por el Gobierno de la Generalitat mediante el Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y, por otra, a la necesidad de crear una unidad orgánica que garantice lo que prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña con respecto a la coordinación de la

aplicación del conjunto de políticas públicas sectoriales para asegurar un tratamiento especial de las zonas de montañas.

Mediante esta normativa se reestructura el Departamento de Territorio y Sostenibilidad en los órganos siguientes: la Secretaría General, la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la Dirección General de Políticas de Montaña. Además, se determina que quedan adscritas al Departamento las siguientes entidades: Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad; Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña, mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad; el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad; Puertos de la Generalitat de Catalunya, mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad; el Instituto Catalán del Suelo, mediante la Secretaría General, sin perjuicio de su coordinación con el departamento competente en materia de vivienda, para las actividades en materia de promoción de la vivienda protegida y de suelo para vivienda protegida; el Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE), mediante la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; el Instituto para el Desarrollo y Promoción del Alto Pirineo y Aran (IDAPA), mediante la Dirección General de Políticas de Montaña; la Agencia Catalana del Agua, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad; la Agencia de Residuos de Cataluña, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad; el Servicio Meteorológico de Cataluña, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad. También quedan adscritas al Departamento las sociedades mercantiles Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad, y Aeroports Públics de Catalunya, SLU, mediante la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad.

También redefine el órgano del Consejo de Dirección como aquel que asiste a la persona titular del Departamento en las funciones de coordinación general, en la elaboración de su política y en el seguimiento de su ejecución. Se determina, de forma genérica, que está integrado por la persona titular del Departamento, que lo preside; por los titulares de las unidades directivas con nivel orgánico de secretaría general y de dirección general; por la persona titular del Gabinete del Consejero/a; y por otras personas que la persona titular del Departamento designe. Asimismo, pueden asistir a él,

de acuerdo con lo que determine la presidencia del Consejo, las personas titulares de cualquier otro cargo del Departamento o titulares de los entes que dependen de este.

El Decreto también modifica una de las funciones de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo —definir y ejecutar las políticas de costas y paisajes—, así como todo el conjunto de funciones que se atribuyen a la Subdirección General de Costas y Acción Territorial.

Por otro lado, el Decreto crea la Dirección General de Políticas de Montaña, atribuyéndole las funciones de:

- a) Coordinar la aplicación del conjunto de políticas sectoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad que son estratégicas para los territorios de montaña.
- b) Proponer y dirigir programas y proyectos estratégicos para los territorios de montaña que puedan conllevar la movilización de recursos técnicos y económicos existentes en otros departamentos, de acuerdo con estos y en coordinación con las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad correspondientes.
- c) Elaborar disposiciones de carácter general relativas a la montaña que aseguren la integración de una visión interdepartamental, y liderar y gestionar el proceso de participación necesario en el territorio.
- d) Hacer el seguimiento y la evaluación del impacto que se deriven de las diferentes políticas sectoriales que afectan a los territorios de montaña.
- e) Asesorar y emitir informe preceptivo en los procesos normativos y de planificación y programación del Gobierno de Cataluña para garantizar que se tienen en cuenta las especificidades de los territorios de montaña.
- f) Velar por la coordinación de las actuaciones de la Administración de la Generalidad y de las demás administraciones públicas que afecten a los territorios de montaña.
- g) Participar en las comisiones transversales que afecten a los territorios de montaña.
- h) Cualquier otra función de naturaleza análoga que se le encomiende.

Además, se determina la adscripción del Servicio de Actuaciones de Montaña a la Dirección General de Políticas de Montaña.

También cabe destacar varias iniciativas normativas en tramitación por resultar de gran interés ambiental. En primer lugar, el Proyecto de Decreto sobre la clasificación, la

codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña, publicado el 10 de noviembre de 2015 en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, anuncio por el que el proyecto se somete a información pública.

El Proyecto de Decreto responde a la necesidad de introducir una simplificación y mejora en la regulación catalana y, a su vez, adaptarla a la normativa estatal y europea vigente. De este modo, se pretende poner fin a la doble clasificación y codificación actual. Respecto a la codificación de los residuos, el Proyecto de Decreto la adecúa a la codificación de seis dígitos de la Lista Europea de Residuos (códigos LER) establecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. En cuanto a la gestión de los residuos, el Proyecto de Decreto establece una correlación entre el código del residuo —será el mismo que el código europeo— y las vías de gestión de valorización o eliminación previstas en el anexo, tanto para los residuos que se tratan como para los que se producen en Cataluña. Así, se establece en el artículo 4 que la gestión de los residuos que se produzcan o gestionen se debe realizar de acuerdo con las vías de valorización o eliminación y de acuerdo con¹⁵:

- a) Las condiciones establecidas en la autorización o la licencia ambiental, o las obligaciones que deriven del régimen de comunicación, de las instalaciones que los produzcan o gestionen.
- b) Lo establecido en el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos aprobado por Decreto Legislativo 1/2009 [y en las disposiciones específicas o complementarias que regulen determinadas categorías de residuos].
- c) En los casos en los que la vía de gestión sea la valorización energética se debe cumplir lo que dispone el artículo 6 [...].
- d) La guía técnica que se prevé que publique la Agencia de Residuos de Cataluña en su web en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto.

También se prevé “un procedimiento contradictorio de clasificación, codificación o vía de gestión de un residuo, que tramitará y resolverá la Agencia de Residuos de Cataluña” y que se iniciaría en los siguientes supuestos: en el caso de que la Agencia de Residuos de Cataluña se oponga a la clasificación o codificación asignada a un residuo por la persona productora o poseedora; y en los supuestos regulados en el artículo 4.2 —se

¹⁵ En este sentido, MODOLELL I BOIRA, G., “Información pública del nuevo Catálogo de Residuos de Catalunya”, en Blog de Terraqui, noviembre 2015 (disponible en el siguiente enlace <http://www.terraqui.com/blog/actualidad/informacion-publica-del-nuevo-catalogo-de-residuos-de-catalunya/> –último acceso, 30 de junio de 2016-).

determinan los supuestos en los que la Agencia de Residuos de Cataluña puede aceptar una vía de gestión diferente— cuando la vía de gestión propuesta por la persona productora o poseedora del residuo no sea aceptada por la Agencia de Residuos de Cataluña.

En cuanto a la mencionada guía, la disposición adicional establece que la Agencia de Residuos de Cataluña debe elaborar y publicar mediante su web una guía técnica de desarrollo del anexo de este proyecto de decreto. Esta guía debe detallar las operaciones de gestión admitidas para cada residuo en función de las vías de gestión de valorización o eliminación que se establecen. Sobre el contenido y la fuerza vinculante que el Proyecto de Decreto otorga a la guía, nos surgen dudas. Sorprende que a través de la guía puedan establecerse las condiciones de gestión de los residuos producidos o gestionados en Cataluña, porque esto supone innovar el ordenamiento jurídico. En este sentido, si lo que se pretende es innovar el ordenamiento jurídico, se debe recordar lo dispuesto en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter general con rango inferior a la ley que contengan normas que innoven el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es necesario que el contenido de la mencionada guía se adopte de acuerdo con el procedimiento previsto para la aprobación de las normas reglamentarias, de forma que se garantice una correcta motivación de la necesidad y oportunidad de sus contenidos, la necesaria participación de los ciudadanos y la emisión de los correspondientes informes preceptivos.

En virtud de la disposición derogatoria de este proyecto de decreto, en cuanto se apruebe y entre en vigor se derogarán el Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de Residuos de Cataluña, y la modificación de este último decreto contenida en el Decreto 92/1999, de 6 de abril.

En segundo lugar, en el ámbito de los residuos también cabe destacar el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20), publicado el 2 de noviembre de 2015, mediante cuyo anuncio se somete a información pública junto con la versión preliminar del Programa y el informe de sostenibilidad ambiental.

El Proyecto de Decreto se enmarca en el artículo 6 del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio,

por el que se establece que el Gobierno de la Generalitat debe elaborar unos programas de gestión de residuos, junto con el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de los Residuos Municipales, en cuya elaboración y revisión se debe incluir una evaluación ambiental, de acuerdo con la normativa aplicable sobre evaluación de las repercusiones de planes y programas sobre el medio ambiente, y se debe garantizar el acceso a la información sobre las medidas establecidas y la consulta y la participación de los entes locales, los agentes sociales y la ciudadanía.

A estos efectos, se pretende aprobar el Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 como un instrumento programático de la Generalitat de Catalunya para hacer frente a los retos estratégicos y los objetivos en materia de prevención y gestión de los residuos hasta el año 2020.

El objeto del Proyecto de Decreto es definir el modelo de prevención y gestión de los residuos y recursos de Cataluña, establecer los objetivos hasta el año 2020 y programar las actuaciones y los instrumentos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

Así, el Proyecto de Decreto contempla el contenido programático del documento y establece unos mecanismos para su revisión y seguimiento que deben permitir revisar su contenido en función de las circunstancias socioeconómicas y ambientales, de manera que se configure como un instrumento de trabajo que se mantenga en todo momento actualizado y permita optimizar la gestión de los residuos.

El Proyecto de Decreto establece los objetivos prioritarios en la prevención y gestión de residuos a cumplir antes del año 2020. En relación con la prevención de residuos, se establece el objetivo de reducir, como mínimo, en un 15% la generación primaria total de residuos de Cataluña, tanto municipales como industriales y de la construcción. En cuanto a la gestión de los residuos municipales, se establecen los siguientes objetivos: incrementar la recogida selectiva bruta de los residuos municipales hasta un nivel mínimo del 60% respecto a los residuos generados; alcanzar, en conjunto, al menos el 55% en peso de residuos domésticos y comerciales destinados a preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otras fracciones reciclables; y lograr unos niveles mínimos de valorización global de un 70% de los residuos municipales generados en Cataluña. En relación con la gestión de residuos de la construcción, se pretende alcanzar unos niveles mínimos de valorización global de un 75% de los residuos de la construcción y demolición generados en Cataluña. Y en cuanto a la prevención y gestión de residuos

industriales, se establece el objetivo de alcanzar, como mínimo, el 64% en peso de preparación para la reutilización y valorización material de los residuos industriales, así como unos niveles mínimos de valorización global efectiva para el año 2020 del 70% de los residuos industriales generados en Cataluña.

También establece las prioridades de las actuaciones necesarias para la gestión de los residuos municipales de Cataluña, las cuales se fundamentan en dos ejes: jerarquía de gestión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio; y jerarquía de actuación, que establece la jerarquía en las acciones a realizar en los tres ámbitos de actuación del Programa: la ciudadanía, las organizaciones y las infraestructuras.

Por otro lado, el Proyecto de Decreto modifica los artículos 11 c) y 15.3 del Decreto 89/2010, de 29 de junio, con el fin de introducir la simplificación administrativa y de clarificar la regulación, respectivamente. Así, la modificación del artículo 11 c) supone la sustitución de la constitución de la fianza exigible en el momento de obtener la licencia de obras por la realización de un depósito del mismo importe ante el gestor de residuos para garantizar la correcta gestión de los residuos, mientras que la modificación del artículo 15.3 responde a una única finalidad aclaratoria en el sentido de concretar los residuos que son objeto de esta previsión de reutilización.

Y, en tercer lugar, también cabe destacar el Proyecto de Decreto por el que se prevé aprobar el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020 (PINFRECAT20), publicado el 2 de noviembre de 2015 en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, anuncio por el que se somete a información pública, junto con la versión preliminar del Plan y el informe de sostenibilidad ambiental.

El Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020 va a suponer la revisión del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión Municipal, aprobado por el Decreto 16/2010, de 16 de febrero, a fin de adaptarlo al contexto general en que se encuentra Cataluña, tanto en términos normativos como con respecto a las complejas condiciones de contexto socioeconómico y financiero.

Este plan debe permitir el desarrollo e implantación efectiva del nuevo Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) y avanzar en la integración de este vector ambiental en el conjunto de políticas de la Generalitat, y debe constituir el marco de referencia para la implantación ordenada y equilibrada en el territorio de las infraestructuras necesarias para el tratamiento de residuos en Cataluña, de acuerdo con la reformulación del modelo de gestión, al que se han de subordinar instrumentos previstos en la legislación urbanística. A estos efectos, se determina que el Plan tiene por objeto: establecer las nuevas bases de modelo de gestión de los residuos municipales; determinar los criterios de implantación de las instalaciones de gestión de residuos en el escenario temporal previsto; fijar la agrupación territorial mediante la determinación de las instalaciones que deben dar servicio a las diferentes comarcas, partiendo de los ámbitos funcionales delimitados por el Plan Territorial General de Cataluña; exponer la situación de las infraestructuras existentes y las capacidades disponibles; y determinar los déficits actuales y futuros que deben ser cubiertos para garantizar el modelo de gestión de residuos municipales exigido en cada momento por el ordenamiento jurídico de aplicación.

En cuanto al contenido del Plan, se prevé la definición del modelo de gestión de los residuos municipales en Cataluña; la exposición y diagnóstico del parque de infraestructuras disponibles que deben dar servicio de tratamiento de los residuos municipales generados en Cataluña en cuanto a la fracción resto, la fracción orgánica (FORM), la valorización energética y la eliminación; la determinación de cinco agrupaciones territoriales, partiendo de los ámbitos funcionales delimitados por el Plan Territorial General de Cataluña, a efectos de compartir las infraestructuras de gestión de residuos para garantizar adecuadamente el principio de sostenibilidad ambiental; la determinación en cada agrupación territorial del balance de situación entre generación y capacidades de tratamiento, estableciendo los déficits que hay que cubrir y los mecanismos para la revisión de los déficits; la identificación y propuesta de actuaciones concretas a desarrollar; los mecanismos y las prescripciones a tener en cuenta para poder desarrollar otras actuaciones no identificadas de forma concreta en el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020 y que deben permitir resolver déficits; la estimación de las inversiones necesarias para llevar a cabo las mejoras o construcción de las instalaciones

identificadas, así como los instrumentos económicos que se prevé poner a disposición de los entes locales para colaborar en la financiación de las actuaciones.

También determina que están afectadas por el Plan las instalaciones de gestión de la fracción resto y la fracción orgánica de residuos municipales (FORM); las instalaciones de valorización energética y de eliminación; y, en cuanto a los depósitos controlados, quedan afectados los de clase II de residuos no peligrosos, mientras que quedan fuera del Plan los de clase I para residuos inertes y los depósitos de clase III para residuos peligrosos.

El Plan también agrupa los ocho ámbitos funcionales establecidos en el Plan Territorial General en cinco grandes agrupaciones territoriales con la finalidad de compartir las infraestructuras de gestión de residuos.

En el ámbito de la contaminación acústica, también debe destacarse la Resolución TES/2553/2015, de 5 de noviembre, por la que se declara una zona de especial protección de la calidad acústica (ZEPCA) en el municipio del Papiol. A estos efectos, se declara la primera ZEPCA en Cataluña, ubicada en un espacio forestal con una superficie de 71,7 hectáreas y un perímetro de 4 km, clasificada como suelo no urbanizable con diferentes calificaciones urbanísticas —la principal es clave 25, cementerios comarcales— y situada en el Parque de Collserola, alrededor del Cementerio Comarcal Roques Blanques. Esta declaración incluye la aprobación de un plan específico de medidas para la ZEPCA, incluido en el anexo II, el cual pretende dotar al Ayuntamiento de los instrumentos más adecuados para mantener y mejorar la calidad acústica de la zona. Este plan se estructura en cuatro ámbitos de actuación: preservación y mejora de la calidad acústica; ambientalización acústica del Ayuntamiento; sensibilización en materia de contaminación acústica; y mecanismos de control. Pero dentro de estos ámbitos de actuación se fija la realización de unas medidas concretas. Así, en el ámbito de la preservación y mejora de la calidad acústica, se establecen las siguientes medidas: restricciones al paso de vehículos; control del ruido generado por la autopista AP-7; estudio de posibles apantallamientos de la autopista AP-7; y actuaciones del Cementerio Comarcal Roques Blanques. En el ámbito de la ambientalización acústica del Ayuntamiento, se determinan medidas para incorporar criterios acústicos en el desarrollo de la zona y criterios acústicos en los servicios municipales. En el tercer ámbito —sensibilización en materia de contaminación acústica—, se fijan medidas relacionadas con la realización de actividades para

sensibilizar sobre la salud ambiental y la contaminación acústica en la población, dar a conocer la ZEPCA, fomentar el uso de la ZEPCA, señalar la ZEPCA, diseñar un espacio específico para la ZEPCA en la web del Ayuntamiento y realizar campañas de sensibilización en las escuelas del municipio. Y en cuanto al ámbito de los mecanismos de control, se determina la necesidad de crear indicadores de control y seguimiento de la calidad acústica de la zona.

2.4. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente

A. La Mesa de Calidad del Aire en El Camp de Tarragona

Mediante el Acuerdo GOV/185/2015, de 15 de diciembre, el Gobierno de la Generalitat ha creado la Mesa de Calidad del Aire en El Camp de Tarragona. Este acuerdo nace en cumplimiento de la Resolución 991/X del Parlamento de Cataluña, sobre la calidad del aire en El Camp de Tarragona, por la que se instaba al Gobierno a crear una mesa territorial sobre la calidad del aire y el posible impacto de las emisiones atmosférica en El Camp de Tarragona y a dar a conocer los resultados de los estudios y análisis del aire que llevan a cabo en la zona el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa de Calidad del Aire en El Camp de Tarragona, adscrita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, es un órgano colegiado de carácter deliberativo que trata sobre la calidad del aire en este territorio, donde el polígono petroquímico más importante del sur de Europa convive con una zona residencial y turística que constituye la segunda área más poblada de Cataluña.

Este órgano tiene como objetivo ser una plataforma territorial de información, participación y consulta en el ámbito de la calidad del aire y su riesgo potencial sobre la salud y dar a conocer los programas de trabajo y los estudios realizados o que se realicen en este ámbito por la Administración de la Generalitat de Catalunya. A estos efectos, sus funciones son informativas y consultivas para colaborar con los departamentos de Territorio y Sostenibilidad, de Salud y de Interior en el análisis de la calidad del aire y los posibles efectos sobre la salud.

La Mesa de Calidad del Aire en El Camp de Tarragona se estructura en el Plenario y en la Comisión Ejecutiva. El Plenario está integrado por la presidencia, que corresponde

al/la consejero/a del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que puede ser sustituido por el/la directora/a general de Calidad Ambiental, y por las vocalías, integradas por unos cincuenta miembros representantes de agentes sociales, administraciones, centros de investigación y empresas. La Comisión Ejecutiva está formada por los miembros siguientes: el/la director/a general de Calidad Ambiental, que ejerce la presidencia, que puede ser sustituido/a por el director/a de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad; el/la director/a de los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en Tarragona; el/la director/a de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo en Tarragona; el/la subdirector/a general de Intervención y Calificación Ambiental; el/la subdirector/a general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica; el/la subdirector/a general de Protección de la Salud; el/la gerente de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona; el/la director/a del Observatorio de la Salud y Medio Ambiente de El Camp de Tarragona; y el/la director/a general de Protección Civil. Las funciones de la Comisión Ejecutiva son activar el funcionamiento de la Mesa y proponer los temas a tratar en el Pleno; elaborar las propuestas de orden del día del Plenario; preparar y dirigir las actividades previstas, así como impulsar y coordinar las tareas de las comisiones de trabajo y recoger los resultados y las propuestas que se deriven de estas; adoptar los acuerdos que se deriven de las actuaciones del Plenario e impulsarlos y hacer su seguimiento; y velar por la gestión administrativa derivada de las actuaciones de la Mesa.

Tanto el Plenario de la Mesa como la Comisión Ejecutiva deben reunirse, al menos, dos veces al año y extraordinariamente siempre que la presidencia lo considere oportuno, en el caso del Plenario, o cuando tres de los miembros de la Comisión lo consideren oportuno.

B. El establecimiento de una prórroga a la moratoria para determinadas infraestructuras de gestión de residuos

Mediante el Acuerdo GOV/164/2015, de 20 de octubre, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya acuerda prorrogar la moratoria establecida en el Acuerdo GOV/158/2013, de 12 de noviembre, respecto a la admisión a trámite de solicitudes que tengan por objeto la nueva ubicación de infraestructuras de gestión de residuos relativas a depósitos

controlados de clase II, hasta la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña.

El Gobierno ya había aprobado mediante el Acuerdo GOV/158/2013, de 12 de noviembre, una moratoria —respecto al anterior Acuerdo GOV/105/2012, de 23 de octubre— desde el 26 de octubre de 2013 hasta la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña, y también había acordado que el plazo máximo de esta moratoria no podría superar los dos años. Así, la moratoria fijada por el citado acuerdo finalizaba el 26 de octubre de 2015. Pero la demora en la tramitación del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña ha provocado que en la fecha de finalización de la moratoria todavía no esté aprobado el Plan. Ante esta situación, el Gobierno considera necesario prorrogar el plazo de la moratoria hasta la aprobación del nuevo Plan.

C. El Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el año 2016

El pasado 4 de enero de 2016, la Dirección General de Calidad Ambiental resolvió aprobar el Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el año 2016. Este programa se desarrolla en cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, que prevé la necesidad de que los órganos competentes dispongan de un sistema de inspección ambiental que incluya el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación. También se vincula con el artículo 23 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que establece que las inspecciones ambientales de las instalaciones donde se lleve a cabo alguna de las actividades indicadas en su anexo I serán objeto de planificación y, de acuerdo con esta, se elaborarán regularmente programas de inspección ambiental que incluyan la frecuencia de las visitas de inspección a los establecimientos.

El Programa de Inspección Ambiental Integrada para el año 2016 es el tercer programa que se ejecuta en el marco del Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para

el período desde 2014 hasta 2016, que se aprobó mediante la Resolución de 21 de febrero de 2014 por la Dirección General de Calidad Ambiental.

Este programa se configura como la herramienta principal para desarrollar las actuaciones materiales de inspección ambiental integrada, y permite el seguimiento y la vigilancia de los establecimientos cubiertos por el Plan de Inspección Ambiental Integrada.

Para el año 2016, el objetivo general del Programa de Inspección Ambiental Integrada es comprobar el grado de cumplimiento de las prescripciones y determinaciones específicas fijadas en las autorizaciones ambientales integradas de los establecimientos cubiertos por el vigente Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña. Pero también se establecen unos objetivos específicos: evaluar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental en el ámbito de las actividades y los sectores productivos; diagnosticar el cumplimiento normativo por medio de inspecciones ambientales de las instalaciones y actividades para permitir, así, identificar el grado de cumplimiento y cuáles son las infracciones tanto a escala de actividad individual como de los diferentes sectores y marcos legislativos; continuar con el desarrollo de una herramienta que permita la evaluación de los riesgos ambientales de los establecimientos cubiertos por el Plan de Inspección Ambiental Integrada; desarrollar y actualizar los protocolos y criterios para realizar e informar las inspecciones ambientales integradas; y promover actividades de formación del personal que realiza inspecciones con el fin de armonizar y unificar los criterios de actuación.

En cuanto a su contenido, el Programa establece una serie de actuaciones de inspección ambiental integrada, diferenciándolas en tres modalidades: programadas, no programadas y documentales. También se refiere a las actuaciones de mejora continua y de cooperación que se prevén, tales como acciones formativas del personal inspector, intercambio de experiencias y actividades de coordinación con otras unidades del departamento competente en materia ambiental y de otros departamentos de la Generalitat que son competentes en materias sectoriales incorporadas en las autorizaciones ambientales integradas, y a los indicadores que se prevé utilizar para realizar la evaluación y el seguimiento del Programa. Estos indicadores se recogerán en la memoria anual, cuya publicación está prevista a lo largo del primer semestre del año 2017.

El Programa se completa con una descripción detallada de aspectos de carácter más técnico como el protocolo a aplicar para la evaluación de los riesgos¹⁶ ambientales de los establecimientos para poder asignar las prioridades temporales (programación) para la realización de inspecciones ambientales integradas y el criterio para la selección de los establecimientos objeto de inspección ambiental integrada.

D. Subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha ordenado, mediante la Orden TES/53/2016, de 10 de marzo, aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros servicios, que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico. Esta actuación de fomento de la Administración ambiental catalana se enmarca en el Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico que aprobó el Gobierno mediante el Acuerdo GOV/127/2014, de 24 de septiembre.

A estos efectos, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha considerado necesario ampliar el objeto de la subvención a la adquisición de vehículos de bajas emisiones destinados al servicio de taxi; a las adquisiciones de vehículos más limpios que tengan un uso comercial y de servicios que también operen en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico.

Para incluir esta ampliación y adaptar las bases reguladoras a la Orden TES/291/2014, de 23 de septiembre, a las novedades introducidas por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, a la Orden EC/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, y a la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha sido necesario aprobar unas nuevas bases reguladoras de subvenciones. Con esta actuación, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad quiere dar continuidad a las ayudas concedidas en el año 2015 para mejorar la calidad del aire.

E. El Catálogo del Paisaje de las Comarcas Centrales

¹⁶ Define como “riesgo” el impacto potencial de la actividad del establecimiento sobre el medio ambiente o la salud cuando el operador no cumple las normas ambientales o las condiciones de su autorización.

En enero de 2016 se ha publicado en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya* el inicio del período de información pública del Catálogo del Paisaje de las Comarcas Centrales, después de que haya sido aprobado inicialmente por el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Una vez que este documento se haya aprobado definitivamente, Cataluña dispondrá ya de los siete catálogos del paisaje que el Gobierno encargó al Observatorio del Paisaje de Cataluña, uno por cada demarcación territorial. Estos catálogos, previstos en la Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, son los documentos técnicos que determinan la tipología de los paisajes de cada zona, sus valores y estado de conservación, los objetivos de calidad que deben cumplir y las propuestas para alcanzarlos.

El Catálogo del Paisaje de las Comarcas Centrales abarca las comarcas de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès y el Solsonès. Al igual que el resto de ámbitos territoriales, las comarcas centrales se caracterizan por la presencia de importantes espacios con valores naturales, estéticos, históricos y productivos. Este catálogo destaca diez rasgos que definen, principalmente, el carácter paisajístico de ese ámbito funcional territorial: el conjunto de mesetas separado por cuencas; el mosaico agroforestal; las masías y construcciones rurales; las construcciones defensivas, castillos y torres; los patrones de asentamiento y núcleos de población singular; los fondos escénicos configurados por las montañas emblemáticas; el patrimonio industrial y minero; los espacios naturales emblemáticos; la red fluvial; y las infraestructuras.

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. El nou Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana. 1.2. Novetats en àmbits sectorials diversos. A. Aigües. B. Protecció de l'atmosfera. C. Instal·lacions nuclears. D. Comerç de fusta. I. Biocarburants. F. Substàncies perilloses. G. Energia elèctrica. H. Eficiència energètica. I. Mobilitat i transport. 1.3. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. El nou règim de comunicació prèvia i registres generals de productors i gestors de residus. 2.2. La regulació del desarrelament d'arbres i d'arbustos. 2.3. Altres normes d'interès. 2.4. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. A. La Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona. B. L'establiment d'una pròrroga a la moratòria per determinades infraestructures de gestió de residus. C. El Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per al 2016. D. Subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions. I. El Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

Durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 d'octubre de 2015 al 20 d'abril de 2016), en l'àmbit estatal, s'han produït poques novetats normatives des del punt de vista ambiental. Des de les passades eleccions generals, celebrades el 20 de desembre, en què cap força política va obtenir un resultat que li permetés governar sense suport, continua en funcions l'últim gabinet de la X legislatura. Com a conseqüència d'aquesta situació política, l'activitat legislativa s'ha vist greument afectada. De fet, únicament s'ha aprovat una norma amb rang de llei, el Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, pel qual es prorroga el Programa d'Activació per a l'Ocupació¹⁷, la qual no té incidència ambiental.

No obstant això, com és habitual, en aquests mesos s'han aprovat unes quantes normes reglamentàries en diversos àmbits sectorials (aigües, eficiència energètica, protecció de l'atmosfera...), tot i que potser el més destacable és l'aprovació del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, que introdueix una concepció nova respecte a l'ordenació del territori i ordenació urbanística, ja que disposa que aquestes són funcions públiques no susceptibles de transacció que organitzen i defineixen l'ús del territori i del sòl d'acord amb l'interès general i amb el principi de desenvolupament sostenible.

En l'àmbit internacional, mereix especial esment l'autorització del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la signatura de l'Acord de París, una fita en la lluita contra el canvi climàtic. El 12 de desembre de 2015, la XXI Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic va assolir l'Acord de París. Aquest acord té com a objectiu evitar que l'increment de la temperatura global del planeta superi els 2°C respecte dels nivells preindustrials i intentar aconseguir, a més,

¹⁷ BOE núm. 92, de 16 d'abril de 2016.

esforços addicionals que facin possible que l'escalfament global no superi els 1,5⁰C. També cal destacar l'Acord del Consell de Ministres del passat mes de novembre de 2015, que reconeix el compromís d'Espanya amb el Fons Verd per al Clima, el principal instrument financer de lluita contra el canvi climàtic de l'ONU, que promou el desenvolupament econòmic i la reducció de la pobresa. Pel que fa a energia renovable, també cal destacar que s'ha resolt a favor del Regne d'Espanya el primer laude arbitral internacional sobre les reformes en el sector de l'energia fotovoltaica. El Tribunal Arbitral de l'Assumpte Charance BV i Construction Investments SARL contra el Regne d'Espanya¹⁸ ha desestimat la demanda presentada per tots dos inversors basant-se en el Tractat de la Carta de l'energia, contra les reformes que es van dur a terme el 2010 en el sector de l'energia fotovoltaica.

En aquest període també s'ha posat de manifest la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes. Prova d'això és el conflicte positiu de competències promogut pel Govern de Catalunya contra diversos preceptes del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum¹⁹. Així mateix, el Govern ha aprovat interposar un conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional en relació amb l'adquisició de crèdits de carboni a càrrec del Fons de Carboni, en el Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector de l'empresa (PIMA Empresa), per a la reducció de gasos amb efecte hivernacle²⁰. A més, en aquest període el Tribunal Constitucional ja ha resolt dos recursos d'inconstitucionalitat que hem comentat en anteriors cròniques. D'una banda, recentment, el Tribunal Constitucional, en la Sentència de 14 d'abril de 2016, ha estimat parcialment el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern contra la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya. Es declara nul l'article 167.1, ja que s'entén que envaeix competències de l'Estat, prohibint l'ús de la fractura hidràulica o *fracking* en l'exploració i explotació

¹⁸ Arbitratge núm. 062/2012.

¹⁹ Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per Providència de 15 de març de 2016. *Vid.* Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 26/2015, de 29 de desembre, sobre el Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

²⁰ *Vid.* Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 1/2016, de 25 de febrer, sobre el Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l'adquisició, pel Fons de Carboni per a una economia sostenible, de crèdits de carboni del Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector de l'empresa "PIMA Empresa" per a la reducció de gasos d'efecte hivernacle en les seves instal·lacions.

dels jaciments d'hidrocarburs, i és l'autorització per a l'ocupació d'aquesta tècnica una competència estatal, tal com el Tribunal ha declarat en anteriors sentències (SSTC 106/2014, 134/2014 i 208/2014). En el mateix sentit que en els pronunciaments anteriors, el Tribunal Constitucional assenyala que les competències autonòmiques sobre ordenació del territori i medi ambient no justifiquen la prohibició del *fracking*, ja que no pot prevaler sobre la competència exclusiva de l'Estat en matèria del règim miner i energètic i d'ordenació general de l'economia. Així, la sentència afirma que la llei catalana impugnada no desplega ni complementa la legislació estatal sinó que la “reformula sota una perspectiva radicalment diferent”, ja que aquesta norma “la desplega en sentit invers com a tecnologia que ha de prohibir-se pels seus possibles efectes perjudicials davant de qualsevol de les múltiples circumstàncies enunciades”. De l'altra, el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern de Múrcia contra diverses disposicions del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric. El Tribunal Constitucional valida, per tant, els principis del nou marc retributiu per a les energies renovables, que ha establert el Govern com a part d'aquesta reforma elèctrica²¹.

Quant a les proposicions de llei de grups parlamentaris del Congrés, ha iniciat la tramitació parlamentària la Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, per a l'exempció de les instal·lacions que operin en règim d'autoconsum vinculades al cicle de l'aigua fins al 31 de desembre de 2019.

Amb relació a les normes reglamentàries en tràmit, es troba en tramitació la Proposta de programes de mesures de les estratègies marines, que va ser presentada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i sotmesa a consulta pública el passat mes de desembre. Posteriorment, una vegada s'hagin conclòs els tràmits de consulta pública i d'avaluació ambiental, les estratègies marines, s'aprovaran mitjançant un reial decret, segons el que estableix l'article 15 de la Llei 41/2010, de protecció del medi marí. En l'àmbit de la protecció de la fauna, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha sotmès a participació pública al gener de 2016, la Proposta d'ordre ministerial, per la qual s'aprova el Pla de Conservació de les Orques de l'Estret i Golf de Cadis, que dona compliment a les obligacions que estableix la legislació estatal respecte a la inclusió d'un tàxon o població en la categoria de “vulnerable” del Catàleg

²¹ STC 270/2015, de 17 de desembre de 2015 (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2016).

d'espècies amenaçades. Pel que fa a residus, aquest mateix Ministeri ha sotmès al mecanisme de participació pública el Projecte d'ordre ministerial, per la qual es modifica l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que trasllada els canvis que incloïa la modificació de la Directiva 2015/1127 de la Comissió en l'annex II. El canvi més significatiu d'aquesta modificació és el que es fa en la fórmula de l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la qual preveu l'eficàcia de la instal·lació per recuperar el poder energètic dels residus i per donar-li ús a aquesta energia sota forma d'electricitat, calor, refrigeració o vapor. En l'àmbit de les substàncies perilloses, s'ha sotmès a informació pública el Projecte d'ordre ministerial que modifica l'annex IV del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substància perilloses en aparells elèctrics i electrònics i els seus residus amb motiu de la transposició de dues directives delegades de la Unió Europea —la Directiva 2015/573 de la Comissió, de 30 de gener de 2015, que modifica, per adaptar-lo al progrés tècnic, l'annex IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlament i del Consell pel que fa a una exempció per al plom en sensors de clorur de polivinil utilitzats en productes sanitaris de diagnòstic *in vitro*; i la Directiva 2015/574 de la Comissió de 30 de gener de 2015, que modifica, per adaptar-lo al progrés tècnic, l'annex IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlament europeu i del Consell quant a una exempció per al mercuri en els sistemes d'obtenció d'imatges d'ultrasò intravascular—, per adaptar el sector al progrés tècnic.

En l'àmbit de la planificació, també cal destacar que el Govern ha culminat el segon cicle de planificació hidrològica en totes les conques competència de l'Estat amb l'aprovació, mitjançant reial decret, dels dotze plans hidrològics de competència estatal que afecten les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Xúquer, Ebre, Ceuta i Melilla; i els plans de competència autonòmica de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras.

Finalment, destaquem, també, que en el període objecte d'examen, ha finalitzat el termini de transposició de les tres noves directives pel que fa a contractació que va aprovar la Unió Europea el 2014, en matèria de contractació del sector públic²². Davant

²² Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió, i la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per

la manca de normativa de transposició a Espanya, tant els tribunals administratius encarregats de la resolució del recurs especial²³ com algunes juntes consultives de contractació s'han pronunciat sobre l'efecte directe d'aquestes directives²⁴.

1.1. El nou Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana

El passat 31 d'octubre es va publicar al BOE el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana. Es tracta d'una norma que pretén, d'una banda, aclarir, regularitzar i harmonitzar la terminologia i el contingut dispositiu de la Llei de sòl, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, així com la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, i de l'altra, estructurar i ordenar en una única disposició general els preceptes de diferent naturalesa i abast que contenen. Això amb la finalitat d'evitar la dispersió de les normes esmentades i el fraccionament de les disposicions que recullen la legislació estatal en matèria de sòl i rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, excepció feta de la part vigent del Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, que té una aplicació supletòria excepte als territoris de les ciutats de Ceuta i Melilla i, en conseqüència, ha quedat fora de la delegació legislativa per la virtut de la qual es dicta aquest reial decret legislatiu. Tot això basant-se en la delegació recollida en l'article 1 h) de la Llei 20/2014, de 29 d'octubre, per la qual es delega al

entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE.

²³ Han elaborat un estudi aprovat en reunió l'1 de març de 2016. Publicat a la seu de l'Observatori de Contractació Pública. http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_documento_final_estudio_aplicacion_directa_de_las_directivas_b43ec509%2321%23pdf/chk.a1819767i7f5371f26dd16ff0f1edcf3 (Data última consulta: 25/04/2016).

²⁴ *Vid.* Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sobre l'efecte directe de les noves directives comunitàries en matèria de contractació pública (BOE núm. 66, de 17 de març de 2016); Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del Document europeu únic de contractació previst en la nova directiva i contractació pública (BOE núm. 85, de 8 d'abril de 2016); Informe 17/2015, de 3 de desembre, sobre els efectes de les directives de contractació pública en la regulació de la Llei 3/2011, de 24 de febrer, de mesures en matèria de contractes del sector públic d'Aragó, després de la conclusió del termini de transposició. Possibilitats de desenvolupament; i l'Informe 1/2016, de 6 d'abril, sobre continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer sobre contractació pública, que han de ser d'aplicació directa a partir del dia 18 d'abril, data en què finalitza el termini de transposició. Breu referència a l'aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

Govern la potestat de dictar diversos textos refosos, en virtut del que estableix l'article 82 i següents de la Constitució espanyola.

Aquest text refós té per objecte regular, per a tot el territori estatal, les condicions bàsiques que garanteixen “la igualtat en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, relacionats amb el sòl; un desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del medi urbà, mitjançant l'impuls i el foment de les actuacions que condueixen a la rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits urbans existents, quan siguin necessàries per assegurar als ciutadans una adequada qualitat de vida i l'efectivitat del seu dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat” (art. 1). Així mateix, estableix les bases econòmiques i mediambientals del règim jurídic del sòl, la seva valoració i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en la matèria. Es tracta d'una norma dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.1a, 13a, 23a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat les competències per regular les condicions bàsiques de la igualtat en l'exercici dels drets i el compliment dels corresponents deures constitucionals i, si escau, de bases del règim de les administracions públiques, de la planificació general de l'activitat econòmica, de protecció del medi ambient i del règim energètic. També es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.8a i 18a de la Constitució espanyola, que reserva al legislador estatal la competència per dictar les disposicions sobre legislació civil, procediment administratiu comú i expropiació forçosa i sistema de responsabilitat de les administracions públiques.

El nou Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana s'estructura en un títol preliminar i vuit títols, integrats per 68 articles, i conté a més, 13 disposicions addicionals, 4 de transitòries i 3 disposicions finals. El títol preliminar (art. d'1 a 4) estableix l'objecte d'aquesta Llei, les definicions, el principi de desenvolupament territorial y urbà sostenible i el concepte d'ordenació del territori i ordenació urbanística. El títol I (art. de 5 a 19) es destina a regular les condicions bàsiques de la igualtat en els drets i deures constitucionals dels ciutadans. El títol II (art. de 20 a 28) se centra en les bases del règim del sòl, regles procedimentals comunes i normes civils. Quant a les bases del règim del sòl, determina els criteris bàsics d'utilització del sòl, les situacions bàsiques del sòl, l'avaluació i el seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, així com la garantia de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions sobre el medi urbà. El títol III (art. de 29 a 30) regula l'Informe d'avaluació

dels edificis. El títol IV (art. de 31 a 33) preveu el règim jurídic de la cooperació i col·laboració interadministrativa. El títol V (art. de 34 a 41) se centra en les valoracions, el seu règim, els criteris generals per a la valoració d'immobles i la valoració del sòl rural i urbanitzat. El títol VI (art. de 42 a 48) regula l'expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial (el règim de les expropiacions per raó de l'ordenació territorial i urbanística; el preu just, l'ocupació i les inscripcions al Registre de la Propietat, l'adquisició lliure de càrregues, les modalitats de gestió de l'expropiació, els supòsits de reversió i de retaxació i els supòsits indemnitzatoris). El títol VII (art. de 49 a 54) estableix la funció social de la propietat i gestió del sòl, en regulant la venda i substitució forçosa, els patrimonis públics de sòl i el dret de superfície. I finalment, el títol VIII (art. de 55 a 68) regula el règim jurídic de les actuacions il·legals i amb el Ministeri Fiscal, les peticions, actes i acords, les accions i recursos, i el Registre de la Propietat.

Entre els canvis més destacables, tot i que no introdueix nous conceptes, cal esmentar la seva nova concepció respecte a l'ordenació del territori i ordenació urbanística, perquè disposa que aquestes són funcions públiques no susceptibles de transacció que organitzen i defineixen l'ús del territori i del sòl d'acord amb l'interès general (art. 4.1)²⁵. Així mateix, estableix —article 3— que les polítiques públiques relatives a la regulació, ordenació, ocupació, transformació i ús del sòl tenen com a fi comú la utilització d'aquest recurs conforme a l'interès general i segons el principi de desenvolupament sostenible. D'aquesta manera, aquestes polítiques públiques “han de propiciar l'ús racional dels recursos naturals harmonitzant els requeriments de l'economia, l'ocupació, la cohesió social, la igualtat de tracte i d'oportunitats, la salut i la seguretat de les persones i la protecció del medi ambient” (art.3.2). Amb aquesta finalitat, es determina que els poders públics formulin i despleguin, “en el medi urbà, les polítiques de la seva respectiva competència, d'acord amb els principis de competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, cohesió territorial, eficiència energètica i complexitat funcional, procurant que, estigui suficientment dotat, i que el sòl s'ocupi de manera eficient, combinant els usos de forma funcional”. A més, sobre aquestes polítiques assenyala específicament que:

²⁵ En aquest sentit, SORIANO-MONTAGUT JENÉ, L., “Publicado el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”, Blog de Terraqui, novembre 2015 (disponible en el següent enllaç: <<http://www.terraqui.com/blog/actualidad/publicado-el-nuevo-texto-refundido-de-la-ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/>>, data última consulta: 30/06/2016).

a) possibilitaran l'ús residencial en habitatges constitutives de domicili habitual en un context urbà segur, salubre, accessible universalment, de qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l'equipament, els serveis, els materials i productes que eliminin o, en tot cas, minimitzin, per aplicació de la millor tecnologia disponible al mercat a preu raonable, les emissions contaminants i de gasos d'efecte hivernacle, el consum d'aigua, energia i la producció de residus, i millorin la seva gestió. b) Afavoriran i fomentaran la dinamització econòmica i social i l'adaptació, la rehabilitació i l'ocupació dels habitatges buits o en desús. c) Milloraran la qualitat i la funcionalitat de les dotacions, infraestructures i espais públics al servei de tots els ciutadans i fomentaran uns serveis generals més eficients econòmicament i ambientalment. d) Afavoriran, amb les infraestructures, dotacions, equipaments i serveis que calguin, la localització d'activitats econòmiques generadores d'ocupació estable, especialment aquelles que facilitin el desenvolupament de la investigació científica i de noves tecnologies, millorant els teixits productius, per mitjà de una gestió intel·ligent. e) Han de garantir l'accés universal dels ciutadans, d'acord amb els requeriments legals mínims, als edificis d'ús privat i públic i a les infraestructures, dotacions, equipaments, transports i serveis. f) Han de garantir la mobilitat en cost i temps raonable, la qual es basarà en un adequat equilibri entre tots els sistemes de transport, que, tot i això, atorgui preferència al transport públic i col·lectiu i potenciï els desplaçaments per als vianants i en bicicleta. g) Integraran en el teixit urbà quants usos siguin compatibles amb la funció residencial, per contribuir a l'equilibri de les ciutats i dels nuclis residencials, afavorint la diversitat d'usos, l'aproximació dels serveis, les dotacions i els equipaments a la comunitat resident, així com la cohesió i la integració social. h) Han de fomentar la protecció de l'atmosfera i l'ús de materials, productes i tecnologies netes que redueixin les emissions contaminants i de gasos d'efecte hivernacle del sector de la construcció, així com de materials reutilitzats i reciclats que contribueixin a millorar l'eficiència en el ús dels recursos. També prevenir i, en tot cas, minimitzaran en la major mesura possible, per aplicació de tots els sistemes i procediments legalment previstos, els impactes negatius dels residus urbans i de la contaminació acústica. i) Prioritzaran les energies renovables enfront de la utilització de fonts d'energia fòssil i combatran la pobresa energètica, fomentant l'estalvi energètic i l'ús eficient dels recursos i de l'energia, preferentment de generació pròpia. j) Valoraran, si escau, la perspectiva turística, i permetran i milloraran l'ús turístic responsable. k) Afavoriran la posada en valor del patrimoni urbanitzat i edificat amb valor històric o cultural. l) Contribuiran a un ús racional de l'aigua,

fomentant una cultura d'eficiència en l'ús dels recursos hídrics, basada en l'estalvi i en la reutilització”²⁶.

Quant a la rehabilitació urbana, el text refós estableix que són prioritàries les mesures que escaiguin per eliminar situacions d'infrahabitatge, per garantir la seguretat, salubritat, habitabilitat i accessibilitat universal i un ús racional de l'energia (art. 4.4).

Per tant, el nou Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana sistematitza el marc jurídic estatal relatiu al sòl, la rehabilitació, regeneració i renovació urbana, i dirigint les seves polítiques públiques cap a “l'ús racional dels recursos naturals i harmonitzant els requeriments de l'economia, l'ocupació, la cohesió social, la igualtat de tracte i d'oportunitat, la salut i seguretat de les persones i la protecció del medi ambient” (art. 3.2)²⁷.

1.2. Novetats en àmbits sectorials diversos

A. Aigües

En matèria d'aigües, hem d'esmentar quatre normes reglamentàries. En primer lloc, el Reial decret 1075/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifica l'annex II del Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, que regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració, que té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 149.1.23a de la Constitució espanyola. Mitjançant aquest reial decret es trasllada al dret espanyol la Directiva 2014/80/UE de la Comissió, de 20 de juny de 2014, que modifica l'annex II de la Directiva 2006/118/CE del Parlament europeu i del Consell, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració que, al seu torn, va ser traslladada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració.

A aquests efectes, aquest reial decret modifica el Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, i afegeix una nova disposició final per habilitar el ministre d'Agricultura,

²⁶ Art. 3.3.

²⁷ *Vid.* SORIANO-MONTAGUT JENÉ, L., “Publicado el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”, Blog de Terraqui, novembre 2015 (disponible en el següent enllaç: <<http://www.terraqui.com/blog/actualidad/publicado-el-nuevo-texto-refundido-de-la-ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/>>, data última consulta: 30/06/2016).

Alimentació i Medi Ambient per modificar, prèvia consulta a les comunitats autònomes, els annexos, per adaptar-se al que disposa la normativa de la Unió Europea i al coneixement científic i tècnic, així com dictar les normes de desenvolupament que resultin necessàries per a la correcta aplicació de les disposicions que conté el reial decret; en l'annex II, part A, en determinar els nivells de referència es fixen uns principis que s'han de tenir en compte; a la llista de substàncies que conté l'annex II, part B, s'afegeixen els nitrats i els fosfats; i en l'annex II, part C, es determina la informació que han d'incloure els plans hidrològics relativa als contaminants i els seus indicadors per als quals s'hagin establert valors llindar. També fa un canvi puntual tant en el Reglament de la planificació hidrològica com en la instrucció de la planificació hidrològica.

En segon lloc, destaquem el Reial decret 1008/2015, de 6 de novembre, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, amb el contingut inclòs en els annexos I i II del Decret 171/2014, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya —títol amb el qual la Generalitat de Catalunya denomina al Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les seves conques internes— inclou conques compreses íntegrament en l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma i, com a tal, ha estat elaborat per l'Administració autonòmica competent i informat favorablement pel Consell Nacional de l'Aigua en la seva reunió del 27 de maig de 2015.

El Pla que aprova aquest reial decret correspon al primer cicle de planificació, ja que el Pla aprovat pel Decret 188/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, al seu torn aprovat pel Reial decret 1219/2011, de 5 de setembre, en els termes que exigeix l'article 41.1 i 40.6 del Text refós de la llei d'aigües, han quedat sense efecte per la Sentència del Tribunal Suprem de 4 d'abril de 2014.

En tercer lloc, destaquem el Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre. Aquest reial decret s'emmarca en el segon cicle de revisió i actualitzacions dels plans hidrològics per al període 2015-2021.

I finalment, el Reial decret 159/2016, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Gestió de Risc d'Inundacions de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, tal com va aprovar inicialment el Consell de Govern de les Illes Balears en la reunió del 19 de febrer de 2016.

B. Protecció de l'atmosfera

En matèria de protecció de l'atmosfera cal esmentar especialment tres normes reglamentàries, totes dictades a l'empara del que disposa l'article 149.1.13a i 23a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i sobre la legislació bàsica pel que fa a la protecció del medi ambient.

En primer lloc, en l'àmbit dels compromisos del Protocol de Kyoto, s'ha aprovat el Reial decret 986/2015, de 30 d'octubre, pel qual es regula arrossegament d'unitats del primer al segon període de compromís del Protocol de Kyoto als titulars de compte privats amb compte obert en el registre nacional d'Espanya.

El Protocol de Kyoto i les decisions que el despleguen adoptades per la Conferència de les Parts en la seva qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto estableixen una sèrie de procediments que han d'iniciar-se al final del primer període de compromís a fi de procedir a la comprovació del compliment de les obligacions de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada Part per aquest període, així com el tractament específic que han de rebre les unitats d'emissió definides en el marc del Protocol. Aquests procediments inclouen, entre altres, la presentació d'un inventari nacional d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que inclogui la sèrie històrica des del 1990 fins al 2012 i la seva revisió per part d'equips d'experts revisors independents, a fi de dur a terme la determinació definitiva de les emissions i absorcions de cada país Part durant el període 2008-2012. També s'ha de dur a terme un procés de retirada de les unitats d'emissió necessàries per cobrir les emissions produïdes, es podrà dur a terme un procés d'arrossegament del primer al segon període de compromís de les unitats sobrants i un procés final de cancel·lació de les unitats que no hagin estat arrossegades ni cancel·lades en fases prèvies. Aquests procediments s'han de dur a terme a partir de l'any 2015, de conformitat amb els terminis marcats per les decisions adoptades per la Conferència de les Parts en la seva qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de

Kyoto.

El Govern, mitjançant aquest reial decret, regula l'arrossegament d'unitats de titulars de compte privats amb compte obert en el Registre Nacional d'Espanya, en els límits marcats, concretant determinats extrems sobre l'abast que té aquest arrossegament per als participants en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto i en el registre nacional Kyoto d'Espanya. També, per mitjà d'aquest reial decret s'atribueix l'execució de l'arrossegament de les unitats de titularitat pública a la Direcció General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

Per donar compliment a aquestes finalitats, l'article 1 del reial decret estableix que poden ser objecte d'arrossegament al segon període de compromís (2013-2020) les reduccions certificades d'emissions (RCE) i les unitats de reducció d'emissions (URE) originades en el primer període de compromís del Protocol de Kyoto (2008-2012) que es trobin, a data 1 d'abril de 2015, en comptes d'havers de titular d'instal·lació, comptes d'havers d'operador d'aeronaus, comptes d'havers de persona i comptes de comerç obertes a l'àrea espanyola del Registre de la Unió així com en comptes d'havers de persona (comptes la numeració dels quals comença per ES-121) i comptes d'havers de titular d'instal·lació (comptes la numeració dels quals comença per ES-120) obertes en el Registre Nacional Kyoto. Així mateix, també poden ser objecte d'arrossegament les reduccions certificades d'emissions (RCE) originades en el primer període de compromís del Protocol de Kyoto (2008-2012) que siguin transferides directament des del registre del Mecanisme de Desenvolupament Net a qualsevol dels comptes identificats en el paràgraf anterior, amb posterioritat a l'1 d'abril de 2015 i fins al 18 de novembre de 2015 inclusivament. Però una vegada s'hagi dut a terme l'operació d'arrossegament, el romanent de reduccions certificades d'emissions i unitats de reducció d'emissions originades en el primer període de compromís que es trobi en comptes d'havers del Registre Nacional Kyoto i no hagués estat arrossegat al segon període de compromís es cancel·larà de conformitat amb el que s'acordi des del punt de vista de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

En segon lloc, s'ha aprovat el Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l'adquisició, pel Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, de crèdits de carboni del Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector de l'empresa PIMA Empresa per reduir gasos d'efecte hivernacle en les seves instal·lacions.

L'objecte d'aquest reial decret és regular el procediment específic d'adquisició de crèdits de carboni, en el marc del Pla PIMA Empresa, a empreses que executin actuacions que reuneixin els requisits que s'estableix la norma, pel Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2) previst en l'article 91 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. Aquest fons té entre els seus objectius la generació d'activitat econòmica baixa en carboni i la contribució al compliment dels objectius sobre reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle assumits per Espanya. Mitjançant aquest reial decret es preveu el procediment específic perquè el Fons esmentat adquireixi, com a crèdits de carboni, reduccions reconegudes d'emissions d'efecte hivernacle que s'aconsegueixin com a conseqüència de la reducció de la petjada de carboni d'abast 1 emmarcades en el Pla PIMA Empresa. D'aquesta manera, el reial decret té per finalitat impulsar activitats i inversions, amb una orientació cap a l'eficiència en l'ús de l'energia, les energies renovables, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de procés i la substitució de gasos fluorats per uns altres de menor potencial d'escalfament global.

El reial decret preveu, en l'article 3, que el Fons pot adquirir crèdits de carboni que es generin per la reducció d'emissions directes de gasos d'efecte hivernacle de les empreses. Però perquè siguin objecte d'adquisició, els crèdits de carboni han de provenir de reduccions d'emissions directes de gasos d'efecte hivernacle que compleixin algunes de les condicions següents: no les ha d'exigir la normativa sectorial que els resulti aplicable i han de tenir totes les autoritzacions administratives necessàries; han de contribuir al compliment dels compromisos quantificats de limitació o reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle assumits per Espanya, mitjançant l'assoliment de reduccions que es reflecteixin en l'Inventari de gasos d'efecte hivernacle; les reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle no han de procedir d'instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió, amb l'objecte d'evitar supòsits de doble comptabilitat; han de procedir d'una o de diverses actuacions incloses en l'annex I; i han de procedir d'actuacions engegades posteriorment a la publicació d'aquest reial decret. Per determinar els projectes susceptibles de produir una reducció d'emissions que generin crèdits de carboni adquiribles pel Fons, es defineix un catàleg d'actuacions en l'annex I del reial decret.

També s'estableix que el preu d'adquisició dels crèdits de carboni ha de ser de 9,7 euros per unitat, i cada unitat constitueix la reducció d'una tona de CO₂ equivalent. El reial

decret també regula el procediment d'avaluació i reconeixement de crèdits de carboni, i determina els òrgans competents per instruir i resoldre; les obligacions dels titulars dels crèdits de carboni, els quals es comprometen a mantenir les actuacions durant un temps igual o superior al dels anys de reducció inclosos en la fórmula de l'annex I, l'efecte del qual pot ser informat a través del registre de la seva petjada de carboni en el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, i en cas de transmissió de la titularitat d'instal·lacions, el nou titular s'ha de subrogar en aquestes obligacions; les mesures d'incompliment de les obligacions dels titulars de crèdits de carboni; la publicitat; les ajudes de minimis i límits per sol·licitants, i les incompatibilitats d'aquest pla.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en atmosferes potencialment explosives. Aquest reial decret té per objecte la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2014/34/UE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.

Per la seva incidència ambiental, destaquem la disposició final primera d'aquest reial decret, per la qual es modifica el Reial decret 455/2012, de 5 de març, que estableix les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el proveïment dels vehicles de motor en les estacions de servei, amb relació als equips de recuperació de vapors de gasolina.

C. Instal·lacions nuclears

En matèria nuclear, s'ha aprovat el Reial decret 1086/2015, de 4 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives.

El Govern ha considerat necessari revisar el Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, per incorporar la legislació aprovada després de la seva entrada en vigor, com la Llei 29/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'experiència adquirida quant a la tramitació del document Pla de Protecció Física de les instal·lacions nuclears, així com l'exigència de coordinar la seva aprovació

amb el Pla de Protecció Específic en el Reial decret 704/2011, de 20 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de les infraestructures crítiques, i establir el procediment per a això.

Mitjançant aquest reial decret es modifica el Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, en els aspectes següents: en l'article 2 s'afegeixen dues noves definicions (unitat de resposta i resposta d'entitat adequada); l'article 5 determina que "les actuacions, comunicacions, arxius, registres i documents relatius al disseny, establiment i aplicació de les mesures de protecció física de materials i instal·lacions nuclears (...) tindran la consideració d'informació que afecta la seguretat nacional a l'efecte del que preveu l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 29/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern"; el paràgraf b) de l'apartat 3 de l'article 6 sobre l'elaboració, posada en pràctica i manteniment dels plans d'actuació exterior i resposta i els plans d'informació preventiva; l'apartat 1 de l'article 8 relatiu a l'amenaça que ha de prendre's com a base per dissenyar els sistemes de protecció física de les centrals nuclears i de les instal·lacions nuclears i fonts radioactives que es considerin necessaris; l'article 14 e) determina la descripció mínima que ha de contenir el Pla de Protecció Física de la instal·lació; l'article 30 amb relació a les mesures generals de protecció física de les centrals nuclears i en les instal·lacions nuclears que es determini per llei; i s'introdueix un nou paràgraf d) en l'article 31, relatiu a les mesures generals de protecció física en les instal·lacions nuclears no incloses en l'article 30. Finalment, s'introdueix una disposició addicional única sobre la integració de plans de protecció física i plans de protecció específics.

D. Comerç de fusta

En l'àmbit de la comercialització de la fusta, cal esmentar el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta. El seu objecte és establir la regulació necessària pel que fa a la lluita contra el comerç de fusta aprofitada il·legalment, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre, relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta a la Comunitat Europea i el Reglament (UE) 995/2010 del Parlament europeu i del Consell, de 20 d'octubre, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, així com en la seva normativa de desplegament.

Quant al seu contingut, aquest reial decret determina l'autoritat competent FLECT a Espanya. També aquest reial decret identifica les autoritats competents a Espanya per a l'aplicació del Reglament (UE) 995/2010 i preveu les atribucions que cadascuna té encomanada, d'acord amb el règim constitucional de competències. En aquest sentit, estableix que “el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és responsable de la comunicació i interlocució amb la Comissió Europea i la resta d'autoritats competents d'altres estats de la Unió Europea, de l'elaboració dels informes nacionals als quals fa referència el reglament esmentat i la seva normativa de desplegament”, i les comunitats autònomes, “són les autoritats competents a les quals correspon el desplegament normatiu així com les funcions executives inherents al seu caràcter d'autoritats competents, en la realització de controls sobre els agents i comerciants que comercialitzen amb fusta i productes de la fusta i la recepció i tramitació de la declaració responsable que inclou aquest reial decret, així com el control de les entitats de supervisió amb seu social en la comunitat autònoma” (art. 3). Però per facilitar la cooperació i col·laboració entre les administracions públiques competents, preveu crear un grup de treball específic pel que fa a la lluita contra el comerç de fusta aprofitada il·legalment en l'àmbit nacional, en el si de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural (art. 4).

S'estableix el procediment per validar la llicència FLEGT que han de presentar els importadors de productes de fusta i derivats procedents d'un país amb acord voluntari d'associació en vigor, la validesa del qual verificarà l'autoritat competent FLEGT. A més, el reial decret determina també un règim de declaració responsable —art. 7— per als agents que comercialitzin productes de fusta al mercat nacional, independentment del seu origen²⁸. A través de la declaració responsable es pretén conèixer les característiques i la naturalesa dels agents que comercialitzen productes de fusta a Espanya i, en segon lloc, facilitar a aquests agents el compliment del contingut del Reglament FLEGT.

Finalment, el reial decret crea “el Sistema Estatal d'Informació del Comerç de Fusta a Espanya amb l'objectiu de coordinar la informació sobre la naturalesa dels agents i comerciants que comercialitzen fusta i productes de la fusta a Espanya i la seva activitat

²⁸ Aquest és un requisit addicional al que estableix la normativa europea però es preveu en la normativa espanyola per mitjà de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, que modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

en aquest àmbit” (art. 10). I en l'article 11 es fixa el compromís d'elaborar “el Pla Nacional de Control de la Legalitat de la Fusta Comercialitzada, amb la finalitat de reduir el risc de comercialitzar fusta i productes de la fusta d'origen il·legal en tot el territori nacional, i d'establir el procediment intern aplicable del que disposa aquest reial decret”.

I. Biocarburants

En l'àmbit dels biocarburants i altres combustibles renovables, s'ha aprovat el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants. Aquest reial decret s'emmarca en el canvi substancial de la conjuntura que va donar lloc a l'aprovació de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, i l'actual escenari de preus dels carburants, amb la qual cosa el Govern “considera convenient revisar els objectius de venda o consum de biocarburants per al període 2016-2020, i estableix únicament un objectiu global de consums mínims obligatoris de biocarburants, de manera que els subjectes obligats tinguin flexibilitat per aconseguir-ho, per mitjà de certificats de biocarburants en dièsel o en gasolina, indistintament”.

El seu objecte és introduir “mesures relacionades amb el foment de la utilització dels biocarburants i altres combustibles renovables confinats de transport, així com la incorporació parcial a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2015/1513 del Parlament europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual es modifica la Directiva 98/70/CE, relativa a la qualitat de la gasolina i el gasoil, i la Directiva 2009/28/CE, relativa al foment de l'ús d'energia renovable procedent de fonts renovables”.

A aquests efectes, el reial decret estableix per a l'any 2016 un objectiu global anual mínim obligatori de venda o consum de biocarburants del 4,3%. Així mateix, per als anys corresponents al període des de 2017 fins a 2020 els objectius obligatoris mínims de biocarburants en còmput anual serà del 5%, 6%, 7% i un 8,5%, respectivament, tots en contingut energètic. També disposa que per a l'any 2020 el còmput en l'objectiu d'energies renovable en el transport, el percentatge de biocarburants produïts a partir de cereals i altres cultius rics en midó, de sucre, d'oleaginoses i d'altres cultius plantats en terres agrícoles com a cultius principals fonamentalment amb finalitats energètiques no pot superar el 7%. Però, a més, s'habilita el Govern a modificar els objectius establerts,

“així com establir objectius addicionals, en funció de l’evolució del sector dels carburants i dels diferents tipus de carburants, els progressos aconseguits en el consum d’electricitat procedent de fonts renovables en el transport i de la normativa comunitària que s’estableixi en matèria d’objectius d’energia renovable en el transport i en el consum final brut d’energia”.

El reial decret també preveu que, “abans del 6 d’abril de 2017, s’establirà un objectiu de venda o consum de biocarburants avançats, el llistat dels biocarburants que tindran la consideració d’avançats, així com el factor multiplicador del contingut energètic de cadascun, per al compliment, si escau, de cadascun dels objectius regulats. Aquest desplegament s’ha de dur a terme en els termes exigits pel Dret de la Unió Europea”.

Però en el cas dels biocarburants produïts a partir de residus, s’estableix que no han d’implicar “una demanda addicional de sòl, i aportar reduccions considerables de les emissions de gasos d’efecte hivernacle”. Per complir els objectius previstos, es disposa que “hauria de fomentar-se la utilització dels biocarburants procedents de matèries primeres residuals, tenint en compte el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en particular, el principi de jerarquia de residus”.

També regula els subjectes obligats a acreditar el compliment dels objectius de venda o consum de biocarburants amb finalitats de transport, i en l’article 3 els estableix: els operadors a l’engròs, regulats en l’article 42 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, per les seves vendes anuals al mercat nacional, excloses les vendes a altres operadors a l’engròs; les empreses que duguin a terme l’activitat de distribució al detall de productes petrolífers, regulada en l’article 43 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, en la part de les seves vendes anuals al mercat nacional no subministrat pels operadors a l’engròs o per altres distribuïdors al detall; i els consumidors de productes petrolífers, en la part del seu consum anual no subministrat per operadors a l’engròs o per les empreses que desenvolupin l’activitat de distribució al detall de productes petrolífers.

Així mateix, també cal destacar el que preveu la disposició addicional tercera sobre la informació relativa a l’origen del combustible en instal·lacions de distribució al detall de productes petrolífers independents. En aquest sentit, s’estableix: “(...) que els titulars de les instal·lacions de distribució al detall de productes petrolífers, que no pertanyin a la xarxa de distribució d’un operador a l’engròs, poden informar de l’origen del combustible que comercialitzen donant publicitat a l’operador majorista o distribuïdor

del qual adquireixen el combustible. En aquest cas, han d'indicar obligatòriament la data d'adquisició, producte, quantitat en metres cúbics i denominació social de tots els operadors a l'engròs i distribuïdors als quals s'hagi adquirit combustible, com a mínim, en els últims seixanta dies. Així mateix, poden incorporar les marques, logotips o altres signes distintius d'aquests operadors i distribuïdors, únicament en els casos en què tinguin autorització prèvia i per escrit del titular de tals marques, logotips o signes distintius”.

Amb aquesta regulació, segons l'exposició de motius, “es pretén que la informació que es presenti als consumidors sobre l'origen del combustible subministrat per les instal·lacions de subministrament al detall sigui veraç i fidel, així com protegir els drets de marca dels operadors a l'engròs i distribuïdors al detall que subministren estacions independents”.

També es preveu l'obligació d'informació de les comunitats autònomes i entitats locals sobre els seus programes d'estalvi i eficiència energètica. Amb aquesta finalitat s'estableix que, “des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, les entitats locals així com l'òrgan competent de cada comunitat autònoma en matèria d'eficiència energètica, informin anualment, abans del 31 de desembre de cada any, al Ministeri, dels estalvis energètics i de les emissions de diòxid de carboni que s'han evitat, derivats de les actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica promogudes per l'entitat local o comunitat autònoma i dutes a terme en l'àmbit del seu municipi i del seu territori respectivament, i de forma agregada des de l'1 de gener de 2014”.

Finalment, “en compliment del que estableix la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, es determina l'obligació de fer una avaluació del potencial d'eficiència energètica de les infraestructures de gas i electricitat, amb la finalitat de poder determinar les mesures i inversions concretes a les xarxes que suposin millores d'eficiència energètica, es recullen alguns aspectes amb relació a la facturació i a l'accés a les dades dels consumidors de gas i electricitat i es regula l'obligació d'aportar informació als consumidors d'energia elèctrica sobre el potencial dels comptadors de telegestió”.

F. Substàncies perilloses

Mitjançant el Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Aquesta norma té caràcter bàsic i es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.29a de la Constitució espanyola, per la qual cosa s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de seguretat pública. Per mitjà d'aquest reial decret es trasllada al nostre ordenament intern les restants previsions de la Directiva 2012/18/UE del Parlament europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012.

Aquest reial decret "té per objecte la prevenció d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, així com la limitació de les seves conseqüències sobre la salut humana, els béns i el medi ambient" (art. 1). Per donar compliment a l'objectiu assenyalat, el reial decret presenta canvis importants, com és "l'alineació de les categories de substàncies del seu annex I amb les corresponents al nou sistema europeu de classificació de substàncies i mescles". Així mateix, "s'inclou un mecanisme de correcció d'aquest annex per preveure les posteriors adaptacions al sistema de classificació que puguin repercutir sobre substàncies per les quals es demostrï que no presenten un risc d'accident greu".

A més, el reial decret reforça les disposicions relacionades amb l'accés del públic a la informació; "amb la participació efectiva del públic interessat en la presa de decisions i amb els drets del públic a interposar recurs davant la justícia". Tot això amb la finalitat de potenciar els mecanismes per a la recopilació d'informació, el seu intercanvi entre les autoritats competents i la Comissió Europea i la seva difusió i posada a la disposició del públic.

Quant als procediments de consulta als industrials i de participació pública en el marc de les polítiques d'ordenació territorial i altres pertinents, aquest reial decret "preveu la coordinació d'aquests procediments amb els existents en altres normatives".

En relació amb les inspeccions dels establiments afectats per aquest reial decret, "s'introdueixen criteris més estrictes, a fi d'assegurar el compliment de les normes de seguretat, així com la implantació efectiva de les mesures de control considerades".

Finalment, aquest reial decret preveu "l'estructura general de la planificació de protecció civil davant riscos especials, integrada pel Pla estatal, els plans de comunitats autònomes i, dins d'aquests últims plans, els plans d'actuació municipal, que constitueixen el model nacional integrat per fer possible una coordinació i actuació

conjunctes dels diferents serveis de les administracions davant dels accidents greus amb substàncies perilloses”.

G. Energia elèctrica

L'activitat normativa en el sector elèctric en el període objecte d'anàlisi ha estat intensa. Destaquem, en primer lloc, el Reial decret 1074/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifiquen diferents disposicions en el sector elèctric. Mitjançant aquest reial decret es modifiquen determinats aspectes de la regulació vigent que, ja que es tracta de qüestions puntuals o que requereixen una aprovació urgent per aplicar-los en el menor termini, s'aglutinen en aquesta normativa.

Aquest reial decret modifica el Reial decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques dels contractes d'adquisició d'energia i d'accés a les xarxes en baixa tensió, per introduir les novetats del Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, en relació amb la facturació a partir de dades de mesura horària per als subministraments de petits consumidors que disposin d'equips de telemesura i telegestió integrats en el sistema efectivament. Així mateix, també modifica el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, “amb la finalitat de precisar quan un equip de mesura es troba efectivament integrat en el sistema de telegestió”. També modifica el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministraments i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, a les instal·lacions eòliques marines fins a 50 MW, per suprimir la limitació dels 10 MW lligada al caràcter experimental i ampliar el procediment general simplificat. En aquest mateix àmbit, es modifica el Reial decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de generació elèctrica en el mar territorial, per determinar que “les instal·lacions de potència superior a 50 MW han de sotmetre's al procediment previst en el títol II”. A més, el reial decret incorpora una modificació puntual d'alguns aspectes del Reial decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l'activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de recarrega energètica, “amb la finalitat de simplificar determinats requisits de caràcter tècnic, en particular per a punts

de recarrega de petita potència associats a activitats diferents de la recarrega energètica atomització al territori d'aquests consumidors". Pel que fa al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, es modifiquen determinats aspectes de caràcter operatius, com la definició del terme d'estimació d'ingressos d'explotació futurs. Finalment, "s'inclou l'obligació, a les empreses titulars de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica que utilitzin carbó autòcton com a combustible, d'enviar mensualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i a l'Operador del Sistema la informació relativa a la utilització d'aquest combustible, amb la finalitat de permetre el seguiment del límit previst en l'article 25.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, relatiu a la utilització de fonts de combustió d'energia primària autòctones en aplicació de la Directiva 2009/72/CE, sobre mercat interior d'electricitat".

En segon lloc, cal esmentar l'Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, que publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, mitjançant el qual es va aprovar el document de Planificació Energètica, Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020, previst en l'article 4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Cal esmentar, en tercer lloc, el Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix la convocatòria per a l'atorgament del règim retributiu específic per fomentar noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de biomassa en el sistema elèctric peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eòlica.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, autoritza el fet que excepcionalment el Govern pugui "establir un règim retributiu específic per fomentar la producció a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració d'alta eficiència i residus, quan existeixi una obligació de compliment d'objectius energètics derivats de directives o altres normes de dret de la Unió Europea o quan la seva introducció suposi una reducció del cost energètic i de la dependència energètica exterior", i fixa els termes en els quals ha de realitzar-se.

A aquests efectes i amb la finalitat d'avançar en el compliment dels objectius establerts en la Directiva 2009/28/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, el reial decret "estableix una convocatòria per a l'atorgament del règim retributiu específic per a noves

instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de biomassa situades en el sistema elèctric peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eòlica”.

L'objecte d'aquesta norma és “l'establiment, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, de les condicions, tecnologia o col·lectiu d'instal·lacions concretes que poden participar en una convocatòria per a l'atorgament del règim retributiu específic per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de biomassa situades en el sistema elèctric peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eòlica. Així mateix, s'aprova la convocatòria per a l'assignació del règim retributiu específic” (art. 1), per la qual cosa s'aplica “a les següents instal·lacions de producció d'energia elèctrica, d'acord amb les classificacions establertes en els articles 2 i 4 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus: a) noves instal·lacions de biomasses dels grups b.6, b.8 o híbrides tipus 1, sempre que en aquest últim cas no utilitzin com a combustible licors negres del grup c.1, situades en el sistema elèctric peninsular; b) instal·lacions del subgrup b.2.1 noves o modificacions d'instal·lacions existents” (art. 2.1).

Quant a l'assignació del règim retributiu específic, el reial decret estableix que la seva assignació s'ha de determinar mitjançant un procediment de concurrència competitiva.

I finalment, el Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per a la connexió a la xarxa de les instal·lacions que s'acullin a qualsevol modalitat d'autoconsum d'energia elèctrica. No obstant això, “les instal·lacions de cogeneració i el seu consumidor associat, encara que comparteixin infraestructura de connexió a la xarxa, continuaran podent triar entre la venda de tota l'energia neta generada o l'acolliment a la modalitat de producció amb autoconsum, quan compleixin els requisits establerts en el reial decret esmentat”. L'autoconsum es defineix en la Llei 24/2014, de 26 de desembre, del sector elèctric com “el consum d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació connectades a l'interior d'una xarxa d'un consumidor o a través d'una línia directa d'energia elèctrica associada a un consumidor i distingeix diverses modalitats d'autoconsum” d'energia, bé amb consum total d'aquesta energia, bé amb existència d'excedents de la instal·lació de producció que puguin abocar-se a les xarxes. Aquesta llei, en relació amb l'autoconsum, té com a finalitat garantir un desenvolupament ordenat de l'activitat compatible “amb la

necessitat de garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del sistema elèctric en el seu conjunt” i remet a un desenvolupament reglamentari.

Aquest reial decret “resulta aplicable a les instal·lacions connectades a l’interior d’una xarxa, fins i tot quan no aboquin energia a les xarxes de transport i distribució en cap instant”, acollides qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica. Tot això sense perjudici de les exempcions previstes per a les instal·lacions aïllades i els grups de generació utilitzats exclusivament en cas d’una interrupció d’alimentació d’energia elèctrica de la xarxa elèctrica d’acord amb les definicions de l’article 100 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

Quant al seu contingut, s’estructura en sis títols diferents, integrats per 25 articles i conté, a més, 10 disposicions addicionals i 10 disposicions transitòries. En el títol I (art. de 1 a 3) inclou una sèrie de disposicions generals destinades a delimitar el seu objecte i àmbit aplicable i a fixar la definició de conceptes rellevants. El títol II (art. de 4 a 6) se centra a determinar la classificació de les modalitats d’autoconsum, els requisits generals de les instal·lacions per acollir-se a una modalitat d’autoconsum i qualitat del servei. El títol III (art. 7 a 10) regula el règim jurídic de les modalitats d’autoconsum, i estableix el procediment de connexió i accés a les modalitats; la formalització de contractes d’accés en les modalitats d’autoconsum; els peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució aplicable als productors d’energia elèctrica i els contractes de subministrament d’energia en les modalitats d’autoconsum. En el títol IV (art. de 11 a 15) es regulen els requisits generals de mesura en la modalitat d’autoconsum i la gestió de l’energia elèctrica produïda i consumida. El títol V (art. de 16 a 18) inclou les condicions de contractació de l’accés a les xarxes i les condicions dels peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució. Finalment, el títol VI (art. de 19 a 25) regula l’organització i el funcionament del Registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica previst en l’article 9.4 de la Llei 24/2013, de 26 de setembre, del sector elèctric, i el règim d’inspecció i sancionador. De les deu disposicions transitòries resulta rellevant el contingut de la primera sobre el règim econòmic transitori aplicable al consum; la segona fa referència al règim de les instal·lacions de cogeneració que tinguin autorització d’exploració; i la tercera preveu l’adequació de les instal·lacions que facin autoconsum d’energia a l’entrada en vigor del reial decret.

H. Eficiència energètica

En l'àmbit de l'eficiència energètica, s'ha aprovat el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

La Unió Europea va actualitzar el marc legal amb l'aprovació de la Directiva 2012/27/UE del Parlament europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, per assolir "l'objectiu general el 2020 s'ha d'aconseguir un estalvi del 20% en el consum d'energia primària de la Unió Europea, i aplicar noves millores de l'eficiència energètica més enllà del 2020".

Aquest reial decret té com a finalitat "l'impuls i la promoció d'un conjunt d'actuacions que s'han de dur a terme dins dels processos de consum energètic que puguin contribuir a l'estalvi i l'eficiència de l'energia primària consumida, així com optimitzar la demanda energètica de la instal·lació, equips o sistemes consumidors d'energia, a més de disposar d'un nombre suficient de professionals competents i fiables a fi d'assegurar l'aplicació efectiva i oportuna de l'esmentada Directiva 2012/27/UE".

A aquests efectes, aquest reial decret "transposa parcialment la directiva esmentada principalment pel que fa a auditories energètiques, sistemes d'acreditació per a proveïdors de serveis energètics i auditories energètiques i la promoció de l'eficiència energètica en els processos de producció i ús de la calor i del fred".

El reial decret, l'objecte del qual és "l'establiment d'un marc normatiu que desplegui i impulsi actuacions dirigides a la millora de l'eficiència energètica d'una organització, a la promoció de l'estalvi energètic i a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que permetin contribuir als objectius de la Unió Europea en matèria d'eficiència energètica", s'estructura en cinc capítols, quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, set disposicions finals i uns quants annexos. El capítol I (art. 1) en determina l'objecte i finalitats, així com les definicions necessàries per a la correcta interpretació del text. El capítol II (art. de 2 a 6) es destina a la regulació de les auditories energètiques i s'hi preveu l'àmbit aplicable; l'abast de l'exigència i els

critèris mínims que han de complir les auditories energètiques; els requisits que han de complir per aconseguir la qualificació d'auditor energètic; el sistema d'inspecció de la realització de les auditories energètiques; i la creació d'un registre administratiu d'auditories energètiques. Conforme a aquesta regulació, les auditories energètiques s'han d'aplicar "a aquelles empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent com a tals tant les que ocupen almenys 250 persones com les que, fins i tot sense complir aquest requisit, tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d'euros i, alhora, un balanç general que excedeixi de 43 milions d'euros. D'igual manera, és també aplicable als grups de societats definits segons el que estableix l'article 42 del Codi de comerç". Queden excloses de l'àmbit aplicable, les microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes). Aquestes empreses han de sotmetre's a una auditoria energètica cada quatre anys, a partir de la data de l'auditoria energètica anterior. El capítol següent, el III (art. de 7 a 12), regula les condicions i els requisits que han d'observar-se per a l'acreditació d'aquests proveïdors de serveis energètics i auditors energètics. El capítol IV (art. 13) regula "l'avaluació del potencial de cogeneració d'alta eficiència i de sistemes urbans de calefacció i refrigeració que s'ha de dur a terme, a fi de facilitar informació als inversors pel que fa als plans nacionals de desenvolupament i contribuir a un entorn estable i propi per a les inversions". I, finalment, el capítol V (art. 14) preveu el règim sancionador pels incompliments del que disposa aquest reial decret.

També cal destacar les quatre disposicions addicionals que inclou aquest reial decret. La primera estableix el termini de què disposen "les grans empreses per complir l'obligació de dur a terme una auditoria energètica i la possibilitat que les auditories dutes a terme a partir de desembre de 2012 puguin servir per complir l'obligació amb certes condicions". La disposició addicional segona determina l'obligació que recull la Directiva 2012/27/UE "que s'ha de fer una avaluació completa de l'ús de la cogeneració d'alta eficiència i dels sistemes urbans de calefacció i refrigeració eficients". En la disposició addicional tercera "s'estableix que les mesures incloses en aquest reial decret no han de suposar un increment de despesa". I en la quarta es fixa "una definició d'edifici de consum d'energia gairebé nul".

I. Mobilitat i transport

Pel que fa a mobilitat i transport, destaca, d'una banda, el Reial decret 1071/2015, de 27 de novembre, dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que confereix a l'Estat la competència exclusiva en material de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, modifica el Reial decret 380/2015, de 14 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del "Programa d'Incentius al Vehicle Eficient, PIVE-8". Aquesta modificació es du a terme "amb la finalitat de mantenir la continuïtat del programa, a l'efecte d'admissió de reserves, fins al 31 de juliol de 2016 o fins a l'esgotament dels fons".

De l'altra, el Reial decret 1078/2015, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recarrega de vehicles elèctrics el 2016, MOVEA. El Pla d'Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d'Energies Alternatives (MOVEA) "és una mesura que forma part de l'Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives (VEGI) a Espanya 2014-2020, dissenyada i engegada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en col·laboració amb altres entitats i ministeris, amb l'objecte d'unificar els diferents programes i plans dirigits a donar suport a l'adquisició dels vehicles més eficients que s'han dissenyat fins al moment. El Consell de Ministres va aprovar l'acord pel qual en pren coneixement el 26 de juny de 2015". El Govern ha considerat convenient i necessari donar continuïtat a aquest tipus de programes d'incentius, encaminats a promoure l'adquisició de vehicles d'energies alternatives.

Per donar compliment a aquesta finalitat, s'aprova aquest reial decret. Aquest reial decret "té per objecte regular les bases per a la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics, de gas líquat del petroli (GLP/Autogás), de gas natural comprimit (GNC) i líquat (GNL), motos elèctriques i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric, amb la qual cosa es fomenta la sostenibilitat en el sector del transport, la disminució de les emissions de contaminants i la millora de qualitat de l'aire, així com la diversificació de les fonts energètiques en el transport i la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli. Així mateix, aquest reial decret també preveu la concessió d'ajudes per a la implantació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics en zones d'accés públic" (art. 1).

Aquestes subvencions s'han de concedir per a l'adquisició a Espanya de vehicles de les categories que es detallen en l'article 4, i per la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics en zones d'accés públic. Així mateix, les ajudes s'han de destinar a

l'adquisició directa o a l'adquisició per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rënting d'un vehicle nou o per a l'adquisició de vehicles elèctrics de fins a sis mesos d'antiguitat, exceptuant las bicicletes de pedaleig assistides per motor elèctric.

Així mateix, s'ha aprovat el Reial decret 15/2016, de 15 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1078/2015, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recarrega de vehicles elèctrics en 2016, MOVEA. La finalitat d'aquesta modificació és aclarir l'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa a la possibilitat que brinda la llei perquè la gestió la dugui a terme una entitat col·laboradora.

1.3. Altres normes d'interès

A més de les normes ressenyades, en el període objecte d'anàlisi poden esmentar-se altres normes d'interès. Entre les quals, destaquem, en matèria de gestió de residus, l'Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, pel qual s'aprova el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022, publicat mitjançant la Resolució de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Ambient.

Aquest pla s'emmarca en la Política de Cohesió per al Període 2014-2020, el qual "inclou com a nova condició per al finançament d'inversions, el compliment de determinats requisits previs", i entre aquestes condicions per al sector dels residus "s'inclouen l'existència de plans de gestió de residus de conformitat amb l'establert en l'article 28" de la Directiva 2008/98/CE del Parlament europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus.

A aquests efectes, el Pla pretén "ser l'instrument per orientar la política de residus a Espanya, impulsant les mesures necessàries per millorar les deficiències detectades i promovent les actuacions que proporcionen un millor resultat ambiental i que assegurin la consecució dels objectius legals".

Per donar compliment a aquestes finalitats, en el Pla es preveu l'aplicació del principi de jerarquia establert en la normativa de la Unió Europea. Aquest principi "estableix que la prevenció ha de ser la prioritat principal en relació amb la política de residus", seguida "per la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altres formes de valorització, inclosa la valorització energètica, i és el dipòsit en abocador l'última opció de la jerarquia per gestionar els residus". El Pla s'estructura en 25 capítols, dedicats en gran part "als fluxos de residus amb normativa específica: residus domèstics i comercials, residus d'envasos, residus d'aparells elèctrics i electrònics, vehicles al final de la seva vida útil, pneumàtics al final de la seva vida útil, olis usats, piles i bateries, residus de construcció i demolició, llots de depuració d'aigües residuals, PCB i PCT, residus agraris, residus d'indústries extractives, residus industrials, bucs i embarcacions al final de la seva vida útil i residus sanitaris". Per a tots aquests fluxos de residus "es descriu la normativa i objectius aplicables, l'evolució i la situació actual de la gestió de residus i s'estableixen objectius i les orientacions i línies estratègiques per assolir-los". També s'inclou un capítol dedicat als sòls contaminats.

I, pel que fa a energia elèctrica, a més de les esmentades en aquesta crònica, l'Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que confereix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, i per l'article 149.1.25a, que confereix a l'Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim miner i energètic, es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, el qual aprova el document de Planificació Energètica, Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2010.

El document de Planificació Energètica "inclou previsions sobre el comportament futur de la demanda, els recursos necessaris per satisfer-la, l'avaluació de les condicions del mercat per garantir el subministrament i els criteris de protecció ambiental". Quant a "l'estructura de proveïment, les previsions del document són que en els propers anys es mantindrà la tendència observada a la planificació 2008-2016, que suposa un augment important del pes de les energies renovables i del gas natural, fonamentalment, en detriment del petroli". En aquest sentit, "es preveu un augment de la participació de les energies renovables del 20% sobre l'energia final bruta i del 10% sobre el consum energètic del sector transport".

Amb relació a la demanda elèctrica final en consum, el Pla "preveu un creixement mitjà

anual del 2% per al període 2014-2020, superior al creixement de la demanda final i de la demanda primària”, la qual cosa es deu al fet que gran part “de les mesures d’eficiència energètica es corresponen amb mesures d’electrificació”. Així mateix, el Pla també “preveu un canvi en l’estructura del parc generador, amb una caiguda del pes del carbó, dels productes petrolífers i del gas natural i un augment del pes de les energies renovables, d’acord amb els objectius en matèria de renovables per al 2020”. Finalment, el Pla inclou un annex II “amb actuacions la necessitat de les quals es preveu per després de 2020, a fi que puguin avançar en la seva tramitació administrativa sense que en cap cas es puguin considerar com a infraestructures planificades”.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

A diferència del que havia succeït en cròniques anteriors, en les quals advertíem de l’elevada activitat normativa de Catalunya en matèria de protecció del medi ambient, en el període examinat, les novetats normatives són poques. No s’ha aprovat cap norma amb rang de llei específicament ambiental.

En l’àmbit reglamentari, les normes més destacables són els decrets 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya; i el Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període continua el seu curs la tramitació del Projecte de llei del canvi climàtic. El 26 de gener de 2016, el Govern català va aprovar el Projecte de llei del canvi climàtic de Catalunya²⁹, seguint el camí fet en el camp de l’acció climàtica, tot això amb la finalitat d’afrontar l’escalfament global mitjançant una norma amb rang de llei. Amb aquesta norma es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos d’efecte hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, encara que afavorint la transició cap a un model baix d’emissions en gasos d’efecte hivernacle i, alhora, estimulants l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus). En segon lloc, reforçar les diverses estratègies i plans que s’han elaborat durant els últims anys en l’àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial

²⁹ Publicat al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* el 25 de maig de 2015.

relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, així com el foment de la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, convertir-se en un país avançat en la recerca i implementació de noves tecnologies. Finalment, visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. Així, el seu objectiu general és “contribuir a l’assoliment d’una societat innovadora, sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic” (art. 1). No obstant això, el mateix text articulat especifica una sèrie d’objectius: la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya per contribuir a la transició cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de combustibles fòssils; la reducció de la vulnerabilitat de la població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes davant els impactes adversos del canvi climàtic, així com la creació i el reforç de les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes; l’adaptació dels sectors econòmics i la incorporació de l’anàlisi de la resiliència al canvi climàtic a la planificació de les infraestructures i de les edificacions; el foment de l’educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de tecnologia i la difusió del coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del canvi climàtic; l’establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els seus impactes, i facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques.

Quant a l’estructura, aquest projecte de llei consta de cinquanta articles, agrupats en un capítol preliminar, sis capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries i onze disposicions finals. El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, detalla les responsabilitats, concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals es refereixen les disposicions d’aquesta norma. El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitigació. El capítol segon preveu els objectius d’adaptació; recull els requisits que han de contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat d’aconseguir una coordinació intersectorial perquè la legislació sectorial catalana s’adapti al nou marc regulador. El capítol tercer regula la integració dels objectius i l’establiment de mesures per assolir els objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del canvi climàtic en totes les

polítiques sectorials de les administracions públiques. En el capítol quart es delimita el nou model organitzatiu; es reforça el paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic; s'articula el dret dels ciutadans a participar en els processos de presa de decisions que s'adoptin en matèria de canvi climàtic; i es regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Català del Clima com a òrgan de participació d'organitzacions i institucions representatives d'interessos diversos. El capítol cinquè regula nous instruments de fiscalitat ambiental i ecològica per fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals. I el capítol sisè inclou una sèrie d'instruments perquè es compleixin els objectius de la norma.

Amb aquest text normatiu Catalunya serà pionera a Espanya i als països del sud d'Europa en la introducció en una norma amb rang de llei del control del canvi climàtic en totes les polítiques sectorials de les administracions públiques, afavorint les mesures que permetin la seva mitigació o adaptació com són l'ús d'energies renovables, la millora en la gestió dels residus, el desenvolupament de l'autoconsum i l'eficiència energètica; la creació de noves figures impositives per fomentar maneres de produir i consumir energia més neta i amb menys impactes ambientals i la creació del Fons Climàtic perquè es compleixin els objectius de la norma.

El passat mes de març, el Govern també va aprovar el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatius i reprèn així la tramitació que va decaure en finalitzar la legislatura anterior.

Paral·lelament, s'estan gestant diverses iniciatives normatives de gran interès en matèria ambiental. En primer lloc, s'ha sotmès a informació pública el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. En segon lloc, també s'ha sotmès a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya (PRECAT20). Finalment, el Projecte de decret pel qual es preveu aprovar el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2020 (PINFRECAT20), també s'ha sotmès a informació pública.

En l'àmbit de la planificació, el més destacable és l'impuls que el Govern ha efectuat en relació a l'elaboració del Pla Nacional per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la constitució del Grup de Treball Interdepartamental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest Pla ha d'orientar l'aplicació dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible a Catalunya i resulta la mostra del compromís amb l'Agenda 2030 de l'ONU.

Finalment, des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític, cal destacar el nou Pla de Govern de Catalunya, que es va presentar el passat dia 19 d'abril de 2016, relatiu a la XI legislatura. Els objectius ambientals que persegueix aquest pla giren al voltant de quatre grans àmbits d'actuació: protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins, i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori; combatre el canvi climàtic, mitigar-ne els efectes i reduir l'impacte de les activitats en l'entorn per millorar la qualitat ambiental del territori; gestionar l'aigua de manera sostenible per garantir la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals; i apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posant en valor els residus i impulsant a la societat que sigui pionera en innovació. Aquests objectius s'emmarquen en la concepció de la sostenibilitat de manera global i transversal en les diferents accions del Govern, i plantegen un conjunt ambiciós de múltiples lleis i mesures per assolir aquests objectius. Per aconseguir el primer objectiu, relatiu a la protecció i restauració dels ecosistemes terrestres i marins, i la promoció de l'ús sostenible del patrimoni natural, es proposen una sèrie de normes i mesures: creació de l'agència del patrimoni natural de Catalunya; la llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes; la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural; la llei de restauració d'activitats extractives; modificació de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes; l'estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica; el reglament de la llei de protecció dels animals; l'estratègia de finançament de la política de patrimoni natural, i increment del 30% dels recursos i la capacitat dels parcs naturals i els consorcis de gestió dels espais naturals protegits; l'elaboració d'un sistema integrat de fites i indicadors relatius als objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides (2015) pel que fa a sostenibilitat, aplicats a Catalunya; la creació d'una fundació tractora de capital públic i privat per a projectes ambientals; programa d'actuacions d'infraestructura verda de Catalunya; protocol i sistema d'informació per al seguiment ambiental de plans i programes; catàleg de protecció de la fauna i l'estratègia de la flora de Catalunya; elaboració de l'informe quadriennal de l'estat del medi ambient a Catalunya 2011-2014; creació del registre de contractes per al foment de la custòdia del territori; reglament del banc de conservació de la naturalesa com a mecanisme de compensació d'impactes ambientals;

pla quadriennal d'inspecció d'activitats extractives 2016-2019 (amb programes anuals); i el desenvolupament del pla de suport al tercer sector ambiental.

Quant al segon objectiu es proposen, entre unes altres, las normes i mesures següents: la Llei de canvi climàtic; la Llei de qualitat ambiental; el desenvolupament dels programes voluntaris de compensació i de reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI); full de ruta governamental de mitigació de l'emissió de GEI horitzó 2020 i revisió dels objectius de mitigació horitzó 2030; revisió de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC); desplegament operatiu de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, d'informació internacional pel que fa al seguiment del canvi climàtic; modificació i millora del sistema de vigilància de la qualitat de l'aire i millora dels canals d'intercanvi d'informació; implantació del Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire, en la conurbació de Barcelona; implantació d'un sistema específic per a la vigilància de la qualitat de l'aire amb especial incidència en els compostos orgànics, en el marc de la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona; declaració com a zones d'especial protecció i punts de referència en matèria de contaminació acústica i lumínica dels parcs naturals del Montsant i del cap de Creus, i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici; elaboració i aprovació dels plànols d'acció de reducció de la contaminació acústica per a les grans aglomeracions i grans infraestructures, en col·laboració amb els ens locals i els titulars; aplicació de mesures de mobilitat sostenible a partir de vehicles de baixes emissions i del sistema de certificació ambiental de flotes; coordinació interdepartamental per a l'aplicació del Reglament de registre, avaluació i autorització de substàncies químiques (REACH) i altra normativa europea pel que fa a substàncies químiques; i definició del programa de projectes domèstics de compensació de CO₂.

Amb relació al tercer objectiu, relatiu a la gestió de l'aigua de manera sostenible, s'inclouen, entre altres, les normes i mesures següents: Pacte Nacional de l'Aigua per definir la planificació i la gestió hídrica a llarg termini i els objectius per a la redistribució de l'esforç; suport a municipis amb problemes financers per connectar-se a xarxes d'abastiment en alta o per crear noves captacions; nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat; Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC); Pla de Gestió de Risc d'Inundacions (PGRI); Programa de Mesures de l'Àmbit Hidrològic (PMH); Pla Especial de Sequeres (PES); avaluació d'alternatives per solucionar el dèficit hídric de les conques internes de Catalunya; impuls de la

construcció del proveïment supramunicipal per a 4 comarques (Segarra, Conca de Barbera, Anoia i Urgell); redacció del Pla Especial d'Usos dels Embassaments de la Baells i Darnius-Boadella, i el Pla d'Acompanyament per a la Municipalització de l'Aigua (PAMA) que inclogui la creació, d'un equip d'assessorament jurídic a disposició dels municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d'aigua per garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon desplegament normatiu.

Pel que fa al quart objectiu, que aposta per una economia verda i circular, el pla d'acció proposa, entre altres, les normes i mesures següents: aprovació i desplegament del Programa General de Gestió de Residus i Recursos Catalunya 2013-2020 (PRECAT20); aprovació i desplegament del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2020 (PRINFRECAT20); Llei de residus, que estableixi la consideració dels residus com a recursos, en línia amb el context europeu basada en l'economia circular i l'ús eficient dels recursos; aplicació de l'acord amb el món local per a la consolidació de l'evolució del cànon de residus municipal, amb horitzó 2020; revisions del cànon de residus industrials; prohibicions de la distribució gratuïta de bosses de plàstic, de caixes i de repartiment a domicili; disseny d'un sistema de dipòsit, devolució i tornada (SDDR) per a determinades categories d'envasos de begudes; suport als ens locals en el desenvolupament de sistemes eficients de recollida selectiva, com el porta a porta, així com sistemes de pagament més justos, com el pagament per generació; posada en servei de 7 noves infraestructures de tractament de residus municipals, 2 millores de plantes i optimització de la capacitat de les instal·lacions existents; prova pilot d'aplicació del cànon de residus industrials en la recuperació de sòls afectats per antigues activitats industrials a Sant Llorenç; aplicació de l'Estratègia Catalana d'Ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora; establiment dels criteris ambientals de referència adequats a les diferents tipologies i objectes de contracte, en el marc de la Compra Pública Verda; promoció de l'adscripció als sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS, Etiqueta Ecològica de la UE i Distintiu Europeu) per potenciar el compromís ambiental de les empreses; programa d'assessorament a les PIME en economia verda i circular; i cupons d'ecoinnovació para PIME, per millorar la seva competitivitat i la transició cap a l'economia verda i circular.

Així mateix, recentment el Govern de la Generalitat ha ratificat l'acord sobre el canvi climàtic que van aprovar per unanimitat 195 països durant la XXI Conferència de les Parts. L'objectiu de l'acord és reforçar el paper de Catalunya com un territori actiu en

les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i consolidar la seva posició de lideratge en l'àmbit internacional.

2.1. El nou règim de comunicació prèvia i registres generals de productors i gestors de residus

En l'àmbit dels residus, el Govern de la Generalitat ha aprovat el decret que regula els requisits que han de complir a Catalunya els productors i els gestors de residus obligats a comunicar l'inici de les seves activitats i els registres generals de persones productores i gestores de residus a Catalunya. Es tracta del Decret 197/2016, de 23 de febrer, que té per objecte regular la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de producció, transport i d'agent o negociant de residus, prevista en l'article 24.1 a) del Text refós de la llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i la prevista en l'article 29 de la Llei 22/2011, de 28 d'abril, de residus i sòls contaminats. També té per objecte regular el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l'Agència de Residus de Catalunya. Aquest decret, en el marc de l'harmonització de la normativa catalana amb la legislació bàsica estatal, “desplega les previsions legals sobre les comunicacions previstes en l'article 24 del Text refós de la llei de residus” i actualitza “la regulació dels registres existents per adequar-los al marc legal vigent”. Es configura com una manifestació dels criteris de simplificació i racionalització que actualment regeixen l'activitat administrativa.

Pel que fa al contingut, el decret s'estructura en quatre capítols. El primer, “disposicions generals”, regula l'objecte del decret de conformitat amb el que hem assenyalat anteriorment, així com la naturalesa pública dels registres i els efectes de la inscripció i la seva comunicació al registre estatal.

El capítol II, per la seva banda, regula el règim de les comunicacions prèvies. S'estableix per a les persones físiques o jurídiques l'obligació de presentar una comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de producció, de transport i d'agent o negociant de residus davant l'Agència de Residus de Catalunya: activitats que produeixin residus perillosos; les activitats que produeixin més d'1.000 t/any de residus no perillosos; les activitats de transport de residus de manera professional amb mètodes professionals; les activitats de recollida de residus sense una instal·lació associada; les

activitats d'agent o negociant de residus, d'acord amb la definició dels articles 3 k) i 3 l) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; i les activitats d'eliminació de residus propis no perillosos en el lloc de producció i de valorització de residus no perillosos, quan estiguin exemptes d'autorització, d'acord amb els criteris que es determinin per a cada tipus d'activitat.

Així mateix, s'eximeixen de l'obligació de comunicació prèvia les empreses que hagin obtingut autorització per al tractament de residus i que, com a conseqüència de la seva activitat, produeixin residus. Però també s'eximeixen les activitats de producció de residus sotmeses a la intervenció administrativa ambiental d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El capítol III regula el registre general de persones productores de residus a Catalunya, i recull les dades que han de constar, la modificació de dades i la baixa en el registre. Són objecte d'inscripció en aquest registre "les persones productores de residus perillosos i les persones productores de residus no perillosos que superin les 1.000 t/any". Finalment, el capítol IV regula el registre general de persones gestores de residus de Catalunya, dividits al seu torn, en tres seccions —gestors de residus, transportistes de residus i agents o negociants de residus—, que contenen prescripcions concernents al procediment d'inscripció, al contingut de la inscripció, modificació de dades i baixa en el registre.

El decret conté també una disposició transitòria que preveu que la informació obrant en els registres de l'Agència de Residus que desapareixen en virtut de la disposició derogatòria³⁰ —Registre de productors; Registre general de gestors; Registre de transportistes de residus industrials; Registre de transportistes de residus inerts de construcció i demolició—, s'incorporarà als nous registres.

2.2. La regulació del desarrelament d'arbres i d'arbustos

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret que regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos. Es tracta del Decret 242/2015, de 10 de novembre, que té per objecte

³⁰Queden derogades les disposicions següents: els articles 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus; el Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya; els articles 17 i 18 i l'annex del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

establir la regulació dels aprofitaments forestals consistents en l'extracció d'arbres i d'arbustos duta a terme en terrenys forestals.

Aquest decret respon a la necessitat d'incorporar els requeriments de la Directiva 2006/123/CE del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, i a les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, el qual preveu la necessitat de revisar els procediments administratius per adequar la gestió administrativa als requeriments d'eficàcia i eficiència que han de presidir l'activitat de l'Administració Pública. A més, incorpora les obligacions establertes en el Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de matèria vegetal i s'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

A aquests efectes, amb aquesta normativa per dur a terme l'activitat de desarrelament, es distingeixen dos règims d'intervenció administrativa. D'una banda, regula el règim de comunicació prèvia, quan les finques forestals en les quals es pretengui exercir l'activitat disposin d'un instrument d'ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el desarrelament d'arbres i arbustos. En aquest cas, les persones titulars de les finques forestals han de presentar, amb una antelació mínima de 10 dies, una comunicació prèvia al departament competent en matèria de boscos. I de l'altra, regula el règim d'autorització prèvia, previst per a les finques forestals que no disposen d'instrument d'ordenació forestal aprovat i vigent. Però s'estableix, com a requisit comú a les sol·licituds d'autorització i comunicacions prèvies, l'obligatorietat de "fer constar el responsable de la realització dels treballs, que ha d'estar inscrit en el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, d'acord amb el Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i s'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya".

D'altra banda, aquest decret recull les condicions tècniques mínimes aplicables als desarrelaments, i pel que fa al règim d'infraccions i sancionis —article 7— es remet al

títol VI de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

2.3. Altres normes d'interès

A més de les que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi podem esmentar altres normes, una d'aprovaada i les altres en tràmit, d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, en primer lloc, l'aprovació del Decret 226/2016, de 15 de març, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'elaboració d'aquest decret respon, d'una banda, a la necessitat d'adequar l'estructura del Departament a la nova distribució de competències establerta pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; i de l'altra, a la necessitat de crear una unitat orgànica que garanteixi el que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya pel que fa a la coordinació de l'aplicació del conjunt de polítiques públiques sectorials per assegurar un tractament especial de les zones de muntanyes.

Amb aquesta normativa es reestructura el Departament de Territori i Sostenibilitat en els òrgans següents: Secretaria General; Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat; Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat; Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i Direcció General de Polítiques de Muntanya. A més, es determina que queden adscrites al Departament les entitats següents: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat; Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat; l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat; Ports de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat; l'Institut Català del Sòl, mitjançant la Secretaria General, sense perjudici de la seva coordinació amb el Departament competent en matèria d'habitatge, per a les activitats en matèria de promoció de l'habitatge protegit i de sòl per a habitatge protegit; l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), mitjançant la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme; l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), mitjançant la Direcció General de Polítiques de Muntanya; l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat;

l'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat; el Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. També queden adscrites al Departament les societats mercantils: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i els Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, i Aeroports Públics de Catalunya, SLU, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

També redefeix l'òrgan del Consell de Direcció com el que assisteix a la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general, en l'elaboració de la seva política i el seguiment de la seva execució. Es determina, de forma genèrica, que està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretària general i de direcció general; per la persona titular del Gabinet del Conseller/a i per les persones que la persona titular del Departament designi; i poden assistir-lo, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, les persones titulars de qualsevol altre càrrec del Departament o titulars dels ens que en depenen.

El decret també modifica una de les funcions de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme —definir i executar les polítiques de costes i paisatge—, així com tot el conjunt de funcions que s'atribueix a la Subdirecció General de Costes i Acció Territorial.

D'altra banda, aquest decret crea la Direcció General de Polítiques de Muntanya, i li atribueix les funcions de: coordinar l'aplicació del conjunt de polítiques sectorials del Departament de Territori i Sostenibilitat que són estratègiques per als territoris de muntanya; proposar i dirigir programes i projectes estratègics per als territoris de muntanya que puguin comportar la mobilització de recursos tècnics i econòmics existents en altres departaments, d'acord amb aquests mitjans i en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents; elaborar disposicions de caràcter general relatives a la muntanya que assegurin la integració d'una visió interdepartamental, i liderar i gestionar el procés de participació necessari al territori; fer el seguiment i l'avaluació de l'impacte que es derivin de les diferents polítiques sectorials que afecten els territoris de muntanya; assessorar i emetre l'informe preceptiu en els processos normatius i de planificació i programació del Govern de Catalunya per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de muntanya; vetllar per la coordinació de les actuacions de l'Administració de la

Generalitat i de les altres administracions públiques que afectin els territoris de muntanya; participar en les comissions transversals que afectin els territoris de muntanya; i qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani. A més, es determina la dependència del Servei d'Actuacions de Muntanya a la Direcció General de Polítiques de Muntanya.

També cal destacar diverses iniciatives normatives, que estan en tràmit, perquè resulten de gran interès ambiental. En primer lloc, el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, publicat el 10 de novembre de 2015, l'anunci pel qual se sotmet a informació pública en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Aquest projecte de decret respon a la necessitat d'introduir una simplificació i millora en la regulació catalana i, al seu torn, adaptar-la a la normativa estatal i europea vigent. D'aquesta manera, es pretén posar fi a la doble classificació i codificació actual. Respecte a la codificació dels residus, el projecte de decret l'adequa a la codificació de sis dígitos de la Llista europea de residus (codis LER) establerta en la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig de 2000. Quant a la gestió dels residus, el projecte de decret estableix una correlació entre el codi del residu —serà el mateix que el codi europeu— i les vies de gestió de valorització o eliminació previstes en l'annex, tant per als residus que es tracten com per als que es produeixen a Catalunya. Així, s'estableix en l'article 4 que la gestió dels residus que es produeixin o gestió s'ha de dur a terme d'acord amb les vies de valorització o eliminació i d'acord amb³¹: les condicions establertes en l'autorització o la llicència ambiental, o les obligacions que derivin del règim de comunicació, de les instal·lacions que els produeixin o gestionin; el que estableix el Text refós de la llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i les disposicions específiques o complementàries que regulin determinades categories de residus; en els casos en què la via de gestió sigui la valorització energètica s'ha de complir el que disposa l'article 6; i la guia tècnica que es preveu que l'Agència de Residus de Catalunya publiqui en el termini d'un any des de l'entrada en vigor del Decret. També es preveu “un procediment contradictori de classificació, codificació o via de gestió d'un residu, que ha de tramitar i resoldre

³¹ En aquest sentit, MODOLELL I BOIRA, G., “Información pública del nuevo Catálogo de Residuos de Catalunya”, en Blog de Terraqui, novembre 2015 (disponible en el següent enllaç <<http://www.terraqui.com/blog/actualidad/informacion-publica-del-nuevo-catalogo-de-residuos-de-catalunya/>>, últim accés, 30 de juny de 2016).

l'Agència de Residus de Catalunya” i s'iniciaria en els següents supòsits: en el cas que l'Agència de Residus de Catalunya s'oposi a la classificació o codificació assignada a un residu per la persona productora o posseïdora; i en els supòsits regulats en l'article 4.2 —es determinen els supòsits en els quals l'Agència de Residus de Catalunya pot acceptar una via de gestió diferent— quan la via de gestió proposada per la persona productora o posseïdora del residu no sigui acceptada per l'Agència de Residus de Catalunya.

Quant a l'esmentada guia, la disposició addicional estableix que l'Agència de Residus de Catalunya ha d'elaborar i publicar mitjançant el seu web una guia tècnica de desplegament de l'annex d'aquest projecte de decret. Aquesta guia ha de detallar les operacions de gestió admeses per a cada residu, en funció de les vies de gestió de valorització o eliminació que s'estableixen. Sobre el contingut i la força vinculant que atorga el projecte de decret a la guia ens sorgeixen dubtes. Sorpren que a través de la guia puguin establir-se les condicions de gestió dels residus produïts o gestionats a Catalunya fins ara inexistents, perquè això suposa innovar l'ordenament jurídic. En aquest sentit, si el que es pretén és innovar l'ordenament jurídic, s'ha de recordar el que disposa la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix un procediment per a l'elaboració i aprovació de les disposicions de caràcter general amb rang inferior a la llei que continguin normes que innovin l'ordenament jurídic. Per tant, cal que el contingut de l'esmentada guia s'adopti d'acord amb el procediment previst per a l'aprovació de les normes reglamentàries, i garantir així una correcta motivació de la necessitat i oportunitat dels seus continguts, la necessària participació dels ciutadans i l'emissió dels corresponents informes preceptius.

En virtut de la disposició derogatòria d'aquest projecte de decret, quan s'aprovi i entri en vigor, es derogarà el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya i la modificació d'aquest decret que conté el Decret 92/1999, de 6 d'abril.

En segon lloc, en l'àmbit dels residus, també cal destacar el projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya (PRECAT20), publicat el 2 de novembre de 2015, l'anunci pel qual se sotmet a informació pública al costat de la versió preliminar del Programa i l'informe de sostenibilitat ambiental.

Aquest projecte de decret s'emmarca en l'article 6 del Text refós de la llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'estableix que el Govern de la Generalitat ha d'elaborar uns programes de gestió de residus, junt amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de gestió dels residus municipals, en l'elaboració i la revisió dels quals s'ha d'incloure una avaluació ambiental, d'acord amb la normativa aplicable sobre avaluació de les repercussions de plans i programes sobre el medi ambient, i s'ha de garantir l'accés a la informació sobre les mesures establertes i la consulta i la participació dels ens locals, els agents socials i la ciutadania.

A aquests efectes, es pretén aprovar el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya com un instrument programàtic de la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i als objectius pel que fa a prevenció i gestió dels residus fins al 2020.

L'objecte d'aquest projecte de decret és definir el model de prevenció i gestió dels residus i recursos de Catalunya, establir els objectius fins al 2020 i programar les actuacions i els instruments necessaris per assolir aquests objectius.

Així, aquest projecte de decret preveu el contingut programàtic del document i estableix mecanismes per revisar-lo i seguir-lo, que han de permetre revisar-ne el contingut en funció de les circumstàncies socioeconòmiques i ambientals, de manera que es configuri com un instrument de treball que es mantingui en tot moment actualitzat i permeti optimitzar la gestió dels residus.

El projecte de decret estableix els objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus que s'han de complir abans del 2020. En relació amb la prevenció de residus, s'estableix l'objectiu de reduir, com a mínim, en un 15% la generació primària total de residus de Catalunya, tant municipals, industrials i de la construcció. Quant a la gestió dels residus municipals, s'estableixen els objectius següents: incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals fins a un nivell mínim del 60% respecte als residus generats; aconseguir, en conjunt, almenys el 55% en pes de residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclables; i assolir uns nivells mínims de valorització global d'un 70% dels residus municipals generats a Catalunya. En relació amb la gestió de residus de la construcció, s'estableix assolir uns nivells mínims de valorització global d'un 75% dels residus de la construcció i demolició generats a Catalunya. I quant a la prevenció i gestió de residus industrials: aconseguir,

com a mínim, el 64% en pes de preparació per a la reutilització i valorització material dels residus industrials, així com uns nivells mínims de valorització efectiva global per a l'any 2020 del 70% dels residus industrials generats a Catalunya.

També estableix les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals de Catalunya, les quals es fonamenten en dos eixos: jerarquia de gestió, d'acord amb el que estableix l'article 6 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol; i jerarquia d'actuació, que estableix la jerarquia en les accions que s'han de dur a terme en els tres àmbits d'actuació del Programa: la ciutadania, les organitzacions i les infraestructures.

D'altra banda, el projecte de decret modifica els articles 11 c) i 15.3 del Decret 89/2010, de 29 de juny, amb la finalitat d'introduir la simplificació administrativa i d'aclarir la regulació, respectivament. Així, la modificació de l'article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança exigible al moment d'obtenir la llicència d'obres per a l'establiment d'un dipòsit del mateix import davant el gestor de residus per garantir la correcta gestió dels residus, mentre que la modificació de l'article 15.3 respon a una única finalitat aclaridora en el sentit de concretar els residus que són objecte d'aquesta previsió de reutilització.

I en tercer lloc, també cal destacar el projecte de decret pel qual es preveu aprovar el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2020 (PINFRECAT20), publicat el 2 de novembre de 2015, l'anunci pel qual se sotmet a informació pública en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, junt amb la versió preliminar el Pla i l'informe de sostenibilitat ambiental.

El Pla territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2020 suposarà la revisió del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió Municipal, aprovat pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, per aconseguir adaptar-lo al context general en què es troba Catalunya, tant en termes normatius com pel que fa a les complexes condicions d'un entorn socioeconòmic i financer.

Aquest pla ha de permetre el desplegament i la implantació efectiva del nou Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) i avançar en la integració d'aquest vector ambiental en el conjunt de polítiques de la Generalitat i ha de constituir el marc de referència per a la implantació ordenada i equilibrada al territori de les infraestructures necessàries per al tractament de residus a Catalunya,

d'acord amb la reformulació del model de gestió, al qual s'han de subordinar instruments previstos en la legislació urbanística. A aquests efectes, es determina que el Pla té per objecte: establir les noves bases de model de gestió dels residus municipals; determinar els criteris d'implantació de les instal·lacions de gestió de residus en l'escenari temporal previst; l'agrupació territorial mitjançant la determinació de les instal·lacions que han de donar servei a les diferents comarques, partint dels àmbits funcionals delimitats pel Pla Territorial General de Catalunya; l'exposició de la situació de les infraestructures existents i capacitats disponibles; i determinar dels dèficits actuals i futurs que han de ser coberts per garantir el model de gestió de residus municipals exigint a cada moment per l'ordenament jurídic aplicable.

Quant al contingut del pla, es preveu la definició del model de gestió dels residus municipals a Catalunya; l'exposició i la diagnosi del parc d'infraestructures disponibles que han de donar servei de tractament dels residus municipals generats a Catalunya, pel que fa a la fracció resta, la fracció orgànica (FORM), la valorització energètica i l'eliminació; la determinació de cinc agrupacions territorials, que parteix dels àmbits funcionals delimitats pel Pla Territorial General de Catalunya, a l'efecte de compartir les infraestructures de gestió de residus per garantir adequadament el principi de sostenibilitat ambiental; la determinació en cada agrupació territorial del balanç de situació entre generació i capacitats de tractament, que estableix els dèficits que cal cobrir i els mecanismes per revisar els dèficits; la identificació i proposta d'actuacions concretes que s'han de dur a terme; els mecanismes i les prescripcions que s'han de tenir en compte per poder implementar altres actuacions no identificades de forma concreta en el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, i que han de permetre resoldre dèficits; l'estimació de les inversions necessàries per dur a terme les millores o construcció de les instal·lacions identificades, així com els instruments econòmics que es preveu posar a la disposició dels ens locals per col·laborar en el finançament de les actuacions.

També determina que el Pla afecta les instal·lacions de gestió de la fracció resta i la fracció orgànica de residus municipals (FORM); les instal·lacions de valorització energètica i d'eliminació; i pel que fa als dipòsits controlats, queden afectats els de classe II de residus no perillosos mentre que queden fora del Pla els de classe I per a residus inerts i els dipòsits de classe III per a residus perillosos.

El Pla també agrupa els 8 àmbits funcionals establerts en el Pla Territorial General en 5 grans agrupacions territorials amb la finalitat de compartir les infraestructures de gestió de residus.

En l'àmbit de la contaminació acústica, també cal destacar la Resolució TES/2553/2015, de 5 de novembre, per la qual es declara una zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) al municipi del Papiol. A aquests efectes, es declara la primera ZEPQA a Catalunya, situada en un espai forestal amb una superfície de 71,7 hectàrees, un perímetre de 4 km, classificada com a sòl no urbanitzable amb diferents qualificacions urbanístiques —la principal és clau 25, cementiris comarcals—, situada al Parc de Collserola, al voltant del Cementiri Comarcal Roques Blanques. Aquesta declaració inclou l'aprovació d'un pla específic de mesures per a la ZEPQA inclòs en l'annex II, el qual pretén dotar l'Ajuntament dels instruments més adequats per mantenir i millorar la qualitat acústica de la zona. Aquest Pla s'estructura en quatre àmbits d'actuació: preservació i millora de la qualitat acústica; ambientalització acústica de l'ajuntament; sensibilització pel que fa a contaminació acústica; i mecanismes de control. Però en aquests àmbits d'actuació es fixen unes mesures concretes. Així, en l'àmbit de la preservació i millora de la qualitat acústica s'estableixen les mesures següents: restriccions al pas de vehicles; control del soroll generat per l'autopista AP-7; estudi de possibles apantallaments de l'autopista AP-7; i actuacions del Cementiri Roques Blanques. En l'àmbit de l'ambientalització acústica de l'ajuntament es determinen mesures per incorporar criteris acústics en la projecció de la zona i criteris acústics en els serveis municipals. En el tercer àmbit —sensibilització pel que fa a contaminació acústica— es fixen mesures relacionades amb la realització d'activitats per sensibilitzar sobre la salut ambiental i la contaminació acústica a la població; activitats per donar a conèixer la ZEPQA; fomentar l'ús de la ZEPQA; senyalitzar la ZEPQA; dissenyar un espai específic per la ZEPQA al web de l'Ajuntament; i dur a terme campanyes de sensibilització a les escoles del municipi. I pel que fa a l'àmbit dels mecanismes de control, es determina la necessitat de crear indicadors de control i seguiment de la qualitat acústica de la zona.

2.4. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient

A. La Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

Mitjançant l'Acord GOV/185/2015, de 15 de desembre, el Govern de la Generalitat va crear la Taula de Qualitat del Aire al Camp de Tarragona. Aquest acord neix en compliment de la Resolució 991/X del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, en la qual s'insta al Govern a crear una taula territorial sobre la qualitat de l'aire i el possible impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona i donar a conèixer els resultats dels estudis i anàlisis que duen a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en l'atmosfera d'aquest àmbit territorial.

La Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, és un òrgan col·legiat de caràcter deliberatiu que tracta sobre la qualitat de l'aire aquesta zona, on conviu el polígon petroquímic més important del sud d'Europa amb una àrea residencial i turística, que constitueix la segona àrea més poblada de Catalunya.

Aquest òrgan té com a objectiu ser una plataforma territorial d'informació, participació i consulta en l'àmbit de la qualitat de l'aire i el seu risc potencial sobre la salut i donar a conèixer els programes de treball i els estudis realitzats o que realitzi en aquest àmbit l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A aquests efectes, les seves funcions són informatives i consultives per col·laborar amb els departaments de Territori i Sostenibilitat, de Salut i d'Interior en l'anàlisi de la qualitat de l'aire i els possibles efectes sobre la salut.

La Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona s'estructura en el Plenari i en la Comissió Executiva. El Plenari està integrat per la presidència, que correspon al conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat, que pot ser substituït pel directora/a general de Qualitat Ambiental i per les vocalies, formada per uns 50 membres representants d'agents socials, administracions, centres de recerca i empreses. La Comissió Executiva està formada pels membres següents: director/a general de Qualitat Ambiental, que exerceix la presidència, que pot ser substituït/a pel director/a dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat; director/a dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona; director/a dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona; sotsdirector/a general d'Intervenció i Qualificació Ambiental; sotsdirector/a general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica; sotsdirector/a general de Protecció de la Salut; gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona; director/a

de l'Observatori de la Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, i el director/a general de Protecció Civil. Les funcions de la Comissió Executiva són activar el funcionament de la Taula i proposar els temes que s'han de tractar en el Ple; elaborar les propostes d'ordre del dia del Plenari; preparar i dirigir les activitats previstes, així com impulsar i coordinar les tasques de les comissions de treball i recollir els resultats i les propostes que se'n derivin; adoptar els acords que es derivin de les actuacions del Plenari i impulsar-los i fer-ne el seguiment; i vetllar per la gestió administrativa derivada de les actuacions de la Taula.

Tant el Plenari de la Taula com la Comissió Executiva han de reunir-se, almenys, dues vegades l'any i extraordinàriament sempre que la presidència ho consideri oportú, en el cas del Plenari, o quan tres dels membres de la Comissió ho considerin oportú.

B. L'establiment d'una pròrroga a la moratòria per a determinades infraestructures de gestió de residus

Mitjançant l'Acord GOV/164/2015, de 20 d'octubre, el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda prorrogar la moratòria establerta en l'Acord GOV/158/2013, de 12 de novembre, en l'admissió a tràmit de sol·licituds que tinguin per objecte la nova ubicació d'infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II, fins a l'aprovació del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals.

El Govern ja va aprovar mitjançant l'Acord GOV/158/2013, de 12 de novembre, una nova moratòria —respecte a l'anterior Acord GOV/105/2012, de 23 d'octubre— des del 26 d'octubre de 2013 fins a l'aprovació del Pla territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, i va acordar que el termini màxim d'aquesta moratòria no podia superar els dos anys. Així, la moratòria fixada per l'acord esmentat va finalitzar en data 26 d'octubre de 2015. Però la demora en la tramitació del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, ha provocat que en la data de finalització de la moratòria encara no estigués aprovat el Pla. Davant d'aquesta situació, el Govern considera necessari prorrogar el termini de la moratòria fins a l'aprovació del nou Pla.

C. El Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per al 2016

El passat 4 de gener de 2016, la Direcció General de Qualitat Ambiental va resoldre aprovar el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per a l'any 2016. Aquest programa es duu a terme en compliment dels preceptes que recull la Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, que preveu la necessitat que els òrgans competents disposin d'un sistema d'inspecció ambiental que inclogui l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de les instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació. També es vincula amb l'article 23 del Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, el qual estableix que les inspeccions ambientals de les instal·lacions on es dugui a terme alguna de les activitats indicades en el seu annex I han de ser objecte de planificació i, d'acord amb aquesta previsió, s'han d'elaborar regularment programes d'inspecció ambiental que incloguin la freqüència de les visites d'inspecció als establiments.

El Programa d'Inspecció Ambiental Integrada per a l'any 2016 és el tercer programa que s'executa en el marc del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per al període que va des de 2014 fins a 2016, el qual va aprovar la Direcció General de Qualitat Ambiental mitjançant la Resolució de 21 de febrer de 2014.

Aquest programa es configura com l'eina principal per dur a terme les actuacions materials d'inspecció ambiental integrada, i permet el seguiment i la vigilància dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada.

L'objectiu general del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, per a l'any 2016, és comprovar el grau de compliment de les prescripcions i determinacions específiques fixades en les autoritzacions ambientals integrades dels establiments coberts pel vigent Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. Però també s'estableixen objectius específics: avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental en l'àmbit de les activitats i els sectors productius; diagnosticar el compliment normatiu per mitjà d'inspeccions ambientals de les instal·lacions i activitats i permetre, així, identificar el grau de compliment i quines són les infraccions, tant a escala d'activitat individual com dels diferents sectors i marcs legislatius; continuar amb el desenvolupament d'una eina que permeti avaluar els riscos ambientals dels establiments que cobreix el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada; desplegar i actualitzar els protocols i criteris per realitzar i informar a les inspeccions ambientals integrades; i promoure activitats de

formació del personal que dur a terme les inspeccions, amb la finalitat d'harmonitzar i unificar els criteris d'actuació.

Quant al contingut, el programa estableix una sèrie d'actuacions d'inspecció ambiental integrada, i les diferencia en tres modalitats: programades, no programades i documentals. També es refereix a les actuacions de millora contínua i de cooperació que es preveuen, tals com accions formatives del personal inspector, intercanvi d'experiències i activitats de coordinació amb altres unitats del departament competent en matèria ambiental i d'altres departaments de la Generalitat que són competents en matèries sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals integrades, i els indicadors que es preveu que utilitza per fer l'avaluació i el seguiment del programa. Aquests indicadors es recullen en la memòria anual, que es preveu que es publiqui al llarg del primer semestre del 2017.

El programa es completa amb una descripció detallada d'aspectes de caràcter més tècnic com el protocol que cal aplicar per a l'avaluació dels riscos³² ambientals dels establiments per poder assignar les prioritats temporals (programació) per a la realització d'inspeccions ambientals integrades i el criteri per a la selecció dels establiments objecte d'inspecció ambiental integrada.

D. Subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha ordenat, mitjançant l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, que s'aprovin les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Aquesta actuació de foment de l'Administració ambiental catalana s'emmarca en el Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a les Zones de Protecció especial de l'Ambient Atmosfèric que va aprovar el Govern mitjançant l'Acord GOV/127/2014, de 24 de setembre.

A aquests efectes, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha considerat necessari ampliar l'objecte de la subvenció a l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinades al servei de taxi, les adquisicions de vehicles més nets que tinguin un ús

³² Defineix com a "risc" l'impacte potencial de l'activitat de l'establiment sobre el medi ambient o la salut quan l'operador no compleix les normes ambientals o les condicions de la seva autorització.

comercial i de serveis que també operin a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Per incloure aquesta ampliació i adaptar les bases reguladores a l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, a les novetats introduïdes per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, a l'Ordre EC/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, ha calgut aprovar noves bases reguladores de subvencions. Amb aquesta actuació, el Departament de Territori i Sostenibilitat vol donar continuïtat a les ajudes concedides el 2015 per millorar la qualitat de l'aire.

I. El Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals

Al gener de 2016 s'ha publicat al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* l'inici del període d'informació pública del Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals, després que l'hagi aprovat inicialment el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Una vegada aquest document s'hagi aprovat definitivament, Catalunya disposarà ja dels set catàlegs del paisatge que el Govern va encarregar a l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un per a cada demarcació territorial. Aquests catàlegs, previstos en la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, són els documents tècnics que determinen la tipologia dels paisatges de cada zona, els seus valors i l'estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los.

El Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals abasta les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès. Igual que la resta d'àmbits territorials, les Comarques Centrals es caracteritzen per la presència d'importants escenaris amb valor natural, estètic, històric i productiu. Aquest catàleg destaca uns trets que defineixen, principalment, el caràcter paisatgístic d'aquest àmbit funcional territorial: el conjunt d'altiplans separat per conques; el mosaic agroforestal; les masies i construccions rurals; les construccions defensives, castells i torres; els patrons d'assentament i nuclis de població singular; els fons escènics configurats per les muntanyes emblemàtiques; el patrimoni industrial i miner; els espais naturals emblemàtics; la xarxa fluvial, i les infraestructures.

